

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA
Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales

“Determinantes históricos de la movilización social en
Bolivia: comunidad agraria, desarrollo económico desigual y
surgimiento de los nuevos actores sociales, El Alto y el Chapare.”

Alumno: Marcelo Mangini
Tutor: Sebastián Etchemendy

Firma del tutor

Junio 2007



Introducción	3
I La revolución en su fase popular: movilización desde abajo, sindicalización agraria y autonomía rural, 1952-1956	
i “ <i>Dos Bolivias</i> ”: <i>el espacio rural y urbano en el período pre-revolucionario</i>	8
ii <i>Revolución del ‘52 y sistema nacional: insurrección y poder obrero</i>	12
iii <i>La Revolución del ‘52 y sistema local: movilización campesina, Reforma Agraria y organización rural.</i>	15
iv <i>Sindicato agrario: raíces comunitario-solidarias del autogobierno local</i>	20
v <i>Sindicato agrario y organización sindical: carácter dual de la organización rural e integración limitada y subordinada</i>	24
II La restauración conservadora: desarrollo económico limitado, diferenciación estructural y perpetuación de la lógica agraria tradicional, 1956-1982	
i <i>La “revolución conservadora”: estabilización económica, ruptura del pacto obrero-campesino y caída del MNR.</i>	28
ii <i>Desarrollo capitalista desigual y combinado: emergencia de la economía oriental y crisis del espacio económico occidental</i>	32
iii <i>El Banzerato: la profundización del modelo de desarrollo; el preludio neoliberal</i>	37
III Neoliberalismo: expansión de la lógica agraria tradicional y surgimiento de nuevos actores sociales, 1982-2000	
i <i>Crisis y reestructuración económica</i>	42
ii “ <i>Nueva urbanidad</i> ”: <i>de campesinos y obreros a ‘vecinos informales’.</i> <i>El caso de El Alto</i>	48
iii <i>Nueva ruralidad</i> ”: <i>coca, supervivencia y movimiento cocalero.</i> <i>El Chapare</i>	54
Conclusión	61
Bibliografía	66

Introducción

Durante la década del '80, América Latina transitó una situación de crisis permanente, tanto política como económica. En el plano político, los países de la región emprendieron el proceso de democratización de sus regímenes políticos, proceso caracterizado por la restitución del gobierno civil a través del sufragio popular. La plena vigencia de los derechos civiles y políticos fue la primera condición para el establecimiento de una democracia representativa y “liberal”, donde la restauración total del juego electoral consagró la centralidad de la cuestión relativa al “poder formal”, su distribución y circulación. En tal sentido, las reglas definidas en la *política institucional* adquirieron una gran relevancia en un régimen ahora dominado por los partidos políticos y los poderes republicanos. La centralidad de la *dimensión política* abrió numerosos debates en torno a cuestiones tales como la representación, la legitimidad, el consenso, la cultura política, la eficiencia, etc.

Al tiempo que América Latina ingresaba en la transición hacia la democracia, las economías de la región vivían una profunda crisis producto de la reestructuración de la economía internacional y del consecuente agotamiento del modelo de desarrollo *estado céntrico*, manifestada en la “crisis de la deuda”. La respuesta al caos económico se definió en la aplicación de medidas ortodoxas de estabilización macro-económicas, elaboradas por los técnicos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos. El temprano éxito en la estabilización de la macroeconomía nacional, dio a estos programas una gran legitimidad ideológica, y constituyó al *neoliberalismo* en una “nueva cultura económica”¹ latinoamericana. A la fase de estabilización macro-económica le siguió la implementación de programas de reestructuración económica, según los principios de la libertad de empresa y comercio, credo privatista, postulado como base necesaria en el camino hacia la modernización social y el desarrollo.

En su doble transición, “América Latina prefiguró en cierto sentido el que la ‘democracia liberal’ se haya visto identificada con regímenes ‘neoliberales’ o ‘capitalistas’”. Ideológicamente, democracia y capitalismo han sido fundidos en una doctrina neoliberal de economía política, que insiste en la necesidad de reforzar aún más el vínculo entre estos dos

¹ Torre, Juan Carlos. *Las dimensiones políticas e institucionales de las reformas estructurales en América Latina*. Santiago de Chile : Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1997.

aspectos”². En tal sentido, y como parte del *clima de época*, en el optimismo neoliberal-institucional, la consecución de una democracia plena que asegurase el bienestar colectivo quedó confiada a la política institucional y al mercado.

Dentro de América Latina, Bolivia ha sido un caso paradigmático de doble transición. Bajo un contexto de profunda crisis, las reformas política y económica confluyeron tempranamente, en una relación de necesidad mutua. Luego de la desastrosa experiencia política y económica vivida bajo el gobierno de izquierda encarnado en la Unión Democracia y Pueblo (1982-1985), el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, conducido por Víctor Paz Estensoro (1985-1989) lanzó el más ortodoxo y arriesgado plan de estabilización implementado hasta entonces en América Latina, conocido como *Nueva Política Económica* (NEP). Consciente de su debilidad política frente a un Congreso fragmentado y fuera de su control, el presidente inauguró el “pacto” como herramienta fundamental de gobernabilidad política. En adelante, Bolivia se caracterizó por su sistema híbrido de “presidencialismo parlamentario”, el cual fue ampliamente elogiado como un mecanismo efectivo para la superación de aquellos problemas de legitimidad dual asociados al presidencialismo puro en condiciones de gobierno dividido³. A su vez, la formación de coaliciones mayoritarias impidió el bloqueo legislativo y se tradujo en una herramienta fundamental de gobierno, habilitando el “consenso” en relación a la reforma política y económica. El mismo consenso fue actualizado periódicamente con posterioridad a cada proceso electoral, permitiendo la renovación y profundización del proceso de reestructuración económica y reforma político-administrativa.

Sin embargo, en el año 2000, Bolivia vivió el inicio de un largo ciclo de movilización social desde abajo, el cual, extendido hasta 2005 tuvo profundas consecuencias tanto en el orden político-institucional como en el económico: la renuncia de dos presidentes constitucionales, la desestructuración del sistema de partidos y declive de las fuerzas políticas tradicionales, y el fin de la democracia de pactos; la impugnación directa a la política de privatizaciones seguida por Bolivia a partir de 1993, signada por la exigencia de la recuperación de la soberanía nacional sobre los recursos naturales. El episodio que dio origen

² Malloy, James. “El problema de la gobernabilidad en Bolivia, Perú y Ecuador”. *Democracia y Gobernabilidad*. Mayorga, Antonio René (Coord.). Caracas: Nueva Sociedad, 1992.

³ Gamarra, Eduardo. “Presidencialismo híbrido y democratización”. *Democracia y Gobernabilidad*. Mayorga, Antonio René (Coord.). Caracas: Nueva Sociedad, 1992. 28 p.

a este *ciclo de protesta*⁴ boliviano, fue la movilización de la ciudad de Cochabamba en rechazo a la privatización del sistema de agua local, el cual articuló a una multiplicidad de actores sociales, tanto urbanos como rurales, en un conflicto abierto con las autoridades públicas y las fuerzas del orden. A partir de este episodio, Bolivia estalló en una multiplicidad de rebeliones *locales* que se multiplicaron a lo largo de toda la geografía nacional, cuestionando al Estado central y al ordenamiento político-económico vigente en cada porción de territorio. En tal sentido, la anulación efectiva de la autoridad estatal fue uno de los rasgos sobresalientes del ciclo. Este hecho se manifestó en el carácter crecientemente violento de los enfrentamientos, definido en el rechazo a los Estados de Sitio declarados por el gobierno, y en un saldo final de 236 muertos y 541 heridos para el período 2000 y 2005. La escalada en la movilización social llegó a su mayor radicalidad en octubre de 2003, cuando el levantamiento de la ciudad de El Alto, en rechazo a la exportación de gas a los Estados Unidos a través de Chile, desató la solidaridad popular y permitió la convergencia del conjunto de los actores sociales movilizados desde el año 2000, en un enfrentamiento sostenido durante diez días con las fuerzas militares, que dejó como saldo decenas de heridos y, fundamentalmente, la renuncia del Presidente Sánchez de Lozada (2002-2003) y culminación del ciclo político-económico iniciado en 1985.

La movilización social en Bolivia tuvo ciertas peculiaridades que hacen de la misma un objeto de estudio particularmente interesante. En primer lugar, se ha destacado por su carácter eminentemente *rural*, tanto en sus actores como en sus estructuras, prácticas, discursos y repertorios. Desde la Guerra del Agua en adelante, sindicatos cocaleros y colonizadores, comunidades indígena-campesinas del Altiplano y juntas vecinales de El Alto (la *ciudad rural*) se constituyeron en los protagonistas de la movilización social al tiempo que definieron su carácter, discurso e identidad. Todos ellos, diferentes pero similares, son los representantes de una ruralidad históricamente particular, caracterizada no tanto por su realidad geográfica como por la herencia y continuidad de estructuras y prácticas de organización propias de la comunidad indígena, reactualizadas y expandidas territorialmente, más allá del espacio rural tradicional. El carácter *autónomo y territorial* de estas estructuras y formas de integración social, dieron a la movilización una fuerza de movilización

⁴ “Una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de interacción entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución.” Tarrow, Sidney. *El poder en movimiento: El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, ES Alianza 1997. 264 p.

particularmente radical, definida en la capacidad efectiva de desplazar y reemplazar al Estado y sus instituciones por formas de control social y territorial propias, ajenas al ordenamiento institucional vigente.

Dicho lo anterior, debemos destacar que la reacción *posliberal* que da origen al mayor proceso de transformación política y social en la historia contemporánea de Bolivia surgió no desde la política institucional sino desde la *política no estatal*, representada en los movimientos con base en la sociedad. En Bolivia, el impulso a la reforma no ha respetado las nociones de participación ciudadana liberal así como tampoco aquellos modelos menos liberales de participación política propios de América Latina, como el populismo,⁵ sino que se ha integrado *horizontalmente* en un movimiento construido desde abajo. La pregunta acerca del origen de esta acción colectiva integrada desde abajo es la que marca la presente investigación.

El interrogante acerca de los orígenes de la movilización social, ha sido la mayor fuente de debates académicos en el mundo de los movimientos sociales. Sin embargo, hacia finales de los '90 surgió una especie de "síntesis" teórica de los movimientos sociales, la cual articuló tres elementos fundamentales⁶: oportunidades políticas (estructura político-institucional, aliados externos, etc.), estructuras de movilización (recursos organizativos) y procesos enmarcadores (cultura). Aún cuando no negamos la importancia de estos tres elementos causales, en la presente investigación, se privilegiará un argumento del tipo histórico-estructural, orientado no hacia aquella dimensión referida a los catalizadores directos de la movilización social, sino hacia sus *determinantes históricos*, comprendidos como aquellos procesos que han facilitado la existencia, supervivencia y expansión de aquel espacio autónomo y horizontal de organización e integración social, definido en estructuras comunitario-solidarias, eje articulador en la emergencia de los nuevos actores sociales bolivianos, particularmente El Alto y el Chapare.

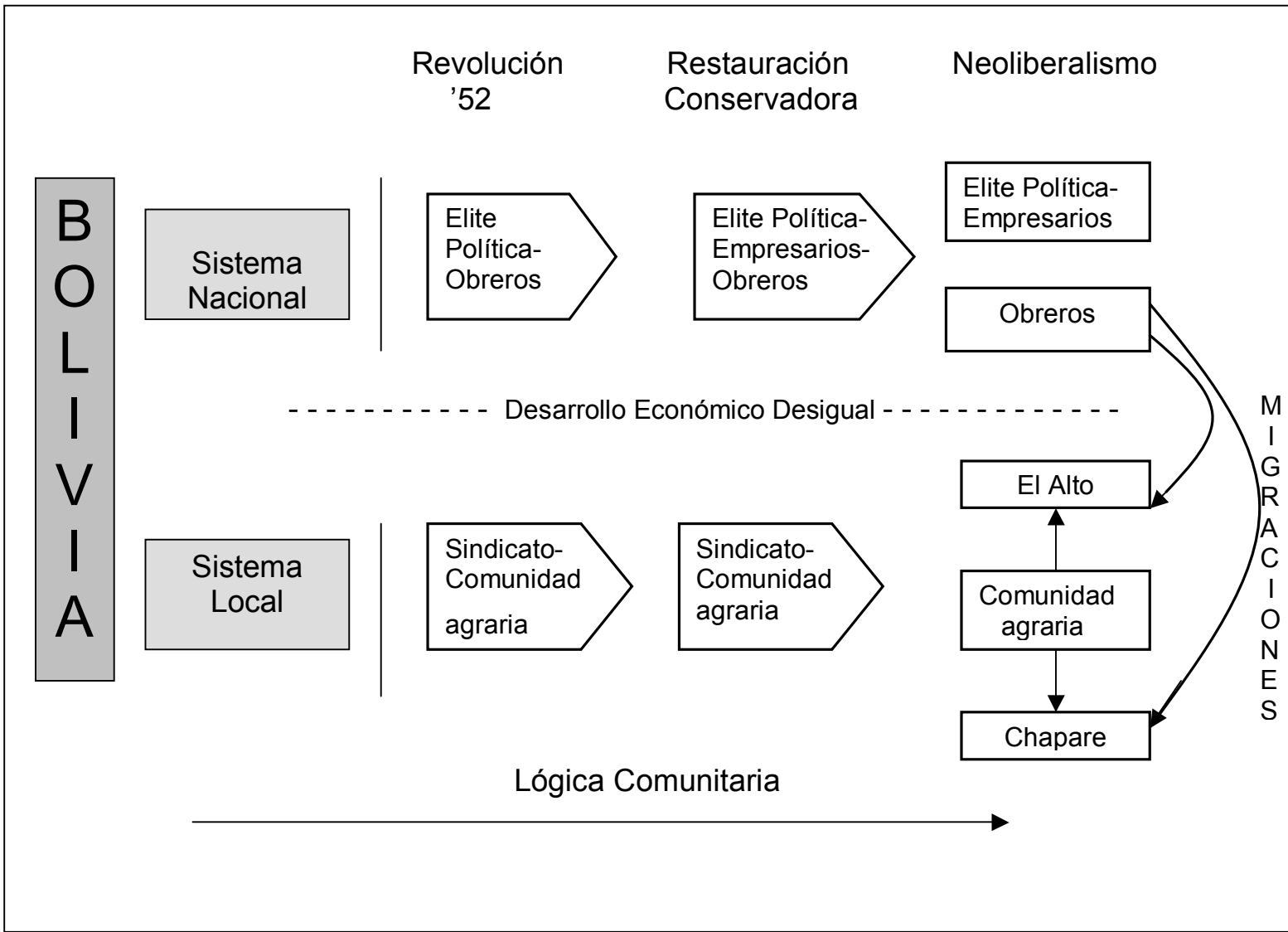
De esta forma, a lo largo de la presente investigación se privilegiará una lectura *histórica* del momento neoliberal, orientada a su comprensión dentro de aquel proceso más profundo de desarrollo estatal asimétrico y diferenciado seguido por Bolivia desde la Revolución del '52 hasta el ciclo neoliberal. El período revolucionario como momento

⁵ Domingo, Pilar. *Democracy and New Social Forces in Bolivia*. Social Forces - Volumen 83, Número 4, Junio 2005.

⁶ McAdam, Doug, ed. *Movimientos sociales. Perspectivas comparadas: oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid: Istmo, 1999.

histórico crítico será el punto de partida de nuestra investigación. Como veremos más adelante, en los años que siguen a la revolución la lucha por el poder político-económico y los cambios en la distribución del mismo delimitaron claramente dos períodos: la *fase popular* (1952-1956) y posteriormente, la *restauración conservadora* (1956-1982). Cada uno de estos periodos tuvo profundas consecuencias para el proceso de conformación estatal boliviano. La fase popular, signada por la movilización campesina, definió un amplio espacio local-rural, de autonomía política y social cotidiana respecto del espacio nacional. Como realidad aislada, el espacio local sobrevivió en estructuras sociales fragmentadas, comunitarias y horizontales. Por su parte, el periodo de restauración conservadora, inició un largo proceso de recomposición de la estructura nacional de dominación económico-política. Esta progresó en la definición de un nuevo modelo de desarrollo que, en las décadas posteriores a la revolución, reconfiguró la dualidad histórica de la formación estatal boliviana, al tiempo que perpetuó la existencia autónoma de la estructural local-rural.

En tal sentido, es nuestra hipótesis que el Estado neoliberal, más que significar un quiebre histórico, vino a concretar aquel proceso de desarrollo económico asimétrico iniciado con posterioridad a la Revolución de 1952 y caracterizado por la definición de un Estado crecientemente dual. Sin embargo, cómo veremos más adelante, el progreso de tal consolidación avanzó sobre la desarticulación del tejido industrial “nacional” y la crisis de la economía rural tradicional, impulsando un proceso de *migraciones masivas* que, en condiciones de desarrollo económico limitado y en un contexto de alta marginalidad y precariedad económico-social, definió la expansión de la *lógica agraria tradicional*, comprendida en estructuras económicas de subsistencia, bajo unidades de producción familiar, las cuales se articulan territorialmente en organizaciones comunitarias y horizontales. Este proceso expansivo, se haya en el origen de la articulación y emergencia de los nuevos actores sociales bolivianos, fundamentalmente, El Alto y el Chapare.



I La revolución en su *fase popular*: movilización desde abajo, sindicalización agraria y autonomía rural, 1952-1956

El objetivo del presente capítulo es explicar los procesos que llevaron a la revolución del '52 a consolidar un espacio rural autónomo al poder central, constituido en la extensión del sindicato agrario. Así, comenzamos el capítulo presentando la realidad dual del Estado boliviano en los años anteriores al inicio del ciclo revolucionario, para continuar abordando la fase popular de la revolución, con un eje en el proceso de desborde de la misma al espacio rural y la activación de la movilización campesina radical y horizontal. Veremos cómo esta movilización definió el control local de la estructura rural heredada, a través de la extensión del sindicato agrario, el cual será descrito en el presente capítulo, destacando sus raíces indígena-comunitarias y su carácter como organización territorial. Por último, se explica en qué forma esta organización local pudo relacionarse con el Estado central manteniendo su autonomía y control sobre el espacio local.

i. *“Dos Bolivias”*: el espacio rural y urbano en el período pre-revolucionario

En su análisis de la realidad boliviana en la primera mitad del siglo XX, James Malloy introduce la idea de “dos Bolivias”⁷, como desarrollo diferenciado hacia el interior de una misma unidad territorial. El sistema “nacional”, moderno y urbano en tiempo y organización, abarcaba aquellos espacios vinculados directamente con los mercados externos a los que se integraba la economía del estaño. Dichos espacios constituían una unidad cerrada, bajo una economía dependiente hacia afuera e intensiva en capital. La inestabilidad del sistema nacional fue su rasgo distintivo durante la primera mitad del siglo XX, en tanto la economía del estaño entra en una larga crisis. En cuanto a su relación con el resto del espacio boliviano, los limitados requerimientos laborales de la economía minera evitaron cualquier expansión del sistema urbano o integración del sistema rural. El campo boliviano no era, siquiera, un productor privilegiado de alimentos baratos para las ciudades y campos mineros integrados a la economía mundial. Una red de transportes, cuya extensión se limitaba a dichos centros y a

los puertos internacionales vecinos, aseguraba a éstos precios más bajos en los productos importados desde países limítrofes que en aquellos producidos en las provincias interiores. Por su parte, el sistema “local” se vinculaba a una economía agrícola de subsistencia, escasamente comercial y limitada a los ámbitos locales y regionales. Su carácter era más bien semi-feudal, en tanto, como veremos más adelante, la hacienda establecía una relación dual con el campesinado, normada por el usufructo de la tierra y prácticas tributarias⁸.

Las *dos Bolivias* se encarnan en dos subsistemas socio económicos bien diferenciados, uno “*nacional*” y otro “*local*”, entroncados bajo una relación de colonialismo interno por la cual “el ‘sistema nacional’ no solo se diferenciaba del ‘sistema local’, sino que lo hacía a expensas de aquél; el atraso de este último se debía en parte a la forma en la que el primero se había desarrollado”.⁹ Las características centrales de los sistemas nacional y local en los años anteriores al inicio de la revolución serán desarrolladas brevemente a continuación.

Hacia mediados del siglo XX, la estructura de propiedad de la tierra en el espacio local- rural boliviano englobaba en sí misma todo un conjunto de interrelaciones sociales que definían una estructura social particular, cuyos rasgos sobresalientes eran la supervivencia de formas indígenas y comunitarias de organización social y económica, las cuales estaban sujetas al control y explotación por parte de los patrones propietarios.

Por su extensión territorial, la institución rural predominante era la hacienda, la cual existía sobre un espacio territorial y poblacional anterior, definido en la comunidad indígena. Hacia mediados y fines del siglo XIX bajo un contexto de crisis de la economía minera, la comunidad indígena, fue incorporada al territorio hacendado y sometida a través de la propiedad legal de la tierra, en una relación de dominación semi-feudal. Dicho proceso persiguió la sujeción y subordinación de gran parte del campesinado indígena, en tanto “la venta de tierras comunales a los hacendados dio lugar a que el campesino tuviera que aceptar condiciones de servidumbre y usufructo sobre las tierras que antes le pertenecían o sufrir el

⁷ Malloy, James. *Bolivia: The uncompleted Revolution*. University of Pittsburgh Press, 1970

⁸ Silvia Cusicanqui discute la utilización del término “feudal” a la realidad del espacio andino y prefiere definir sus relaciones características bajo el término “servil-colonial” por derivarse de patrones de sujeción del trabajo vigentes bajo la colonia. Sin entrar en una discusión histórica profunda, en tanto el espacio colonial reprodujo estructuras y relaciones feudales de dominación de una fuerza de trabajo no libre, creo que el concepto “servil- colonial” sin significar algo realmente diferente del término feudal, tiene como efecto el “matizar” la descripción de la realidad altiplánica en el período pre revolucionario. Es por esto que en el presente trabajo preferimos el término feudal. En: Cusicanqui, Silvia. *Opressed but not defeated*. Ginebra: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986; p.66

⁹ Malloy, James. 1970, *op. cit.*, p.29

desahucio”¹⁰. La relación entre el patrón y la población local excedió el ámbito de la producción agrícola. “En este sistema [hacendal], la principal fuerza de trabajo se basaba en una disposición de usufructo y servicio de tenencia de tierras, y en una relación de siervo patrón”¹¹.

Hacia 1950, dos tercios del campesinado vivía bajo el sistema servil hacendal, en tanto solo un tercio permanecía en comunidades independientes¹². Sin embargo, la concentración de la propiedad agrícola y la alta densidad de la población indígena organizada en las comunidades sobre las cuales la hacienda se asienta, dotaron a esta última de un *carácter dual*. Aún cuando los hacendados ejercían la propiedad y autoridad sobre sus tierras, el control efectivo que estos tenían sobre el proceso productivo en una agricultura escasamente comercial, era mas bien limitado. En este sentido, los propietarios dependían de las formas de producción y técnicas típicas del trabajo agrícola familiar-comunitario del altiplano que, de esta forma, sobrevivieron casi intactas hacia el interior de la hacienda. Esta era la “*dualidad típica de la hacienda altiplánica*”¹³, aquella que habilitó la continuidad de estructuras de organización social-económica y prácticas culturales pre coloniales hasta el inicio del ciclo revolucionario. Como veremos más adelante, si la estructura hacendal dual permitió esta continuidad, el carácter particular que adquieren la acción revolucionaria y el desarrollo capitalista posterior a ésta definirán no tanto su destrucción, como las condiciones para su supervivencia, adaptación y extensión.

En el ‘sistema nacional’, el *boom* de la minería de estaño hacia principios de siglo había brindado gran dinamismo económico y una importante estabilidad política. Sin embargo, con el declive de la industria del estaño, ya notoria en los tempranos ‘20 y acentuada luego la Gran Depresión del ‘29, el status de la elite se vio seriamente amenazado, en tanto las limitaciones y contradicciones de una economía monoprodutora y dependiente tiraban por la borda las aspiraciones de toda una generación de jóvenes que aún esperaba incorporarse a los sectores más acomodados de la sociedad boliviana. En la medida en que el sistema económico se estancaba, así también lo hicieron las estructuras económica y política,

¹⁰ Pearse, Andrew. “Campesinado y revolución: el caso de Bolivia.” *Bolivia: La fuerza histórica del campesinado*. Comp. Fernando Calderón, Jorge Dandler. Ginebra: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986; p.317

¹¹ *Ibid*, p.321

¹² Según el censo de 1950, las comunidades ascendían a 3.779, algo menos del 4 por ciento de las unidades productivas totales, agrupando el 26 por ciento del área cultivada. Ver: Cusicanqui, Silvia. 1986, *op. cit.*

¹³ Cusicanqui, Silvia. 1986, *op. cit.*, p.66

lo que definió una tendencia marcada al faccionalismo y a la competencia por el acceso al gobierno, único espacio de seguridad económica. La inestabilidad política se manifestó en la crítica sucesión de gobiernos débiles y golpes de Estado entre 1920 y 1952, profundizada en la medida en que la economía se estancaba definitivamente.

En tanto la elite nacional se desgarraba en el conflicto faccioso, las nuevas generaciones de jóvenes que esperaban poder renovar sus filas, definieron una ideología crecientemente crítica al sistema vigente, el cual no ofrecía ninguna alternativa a su posición, cada vez más marginal. Estos sectores, integrados por fracciones de la pequeña burguesía y las capas medias profesionales, identificaron las causas de su penosa situación así como las de la realidad misma de la política boliviana, consecuencia de un sistema económico monoprodutor, dependiente y limitado, cuya continuación era inconciliable con sus intereses de clase y con la idea de desarrollo del país. La desastrosa derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco (1932-1936) y la profundización de la crisis económica y política en que ésta derivó, iniciaron un período de transformación política en el cual las fuerzas en búsqueda del cambio fueron tomando forma institucional y creando bases amplias de apoyo, en un enfrentamiento directo con la elite política establecida que muy pronto cerró sus filas al nuevo movimiento. “la elite y sub elite que retornó del Chaco renovó vehementemente sus demandas de cambio. Más aún, comenzaron a demandar su derecho exclusivo a liderar tales cambios”¹⁴.

Este movimiento encontró su vertiente más exitosa en el nacionalismo reformista, el cual impulsaba una reforma radical, impuesta desde arriba por una pequeña elite burguesa. Su visión respecto de los sectores subordinados se nutría de aquellas nociones europeas ligadas al fascismo y corporativismo estatal, que alentaban el paternalismo y la manipulación. En el año 1941, este proyecto se plasmó en la creación de Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), una década más tarde, líder la Revolución. En sus primeros años, el MNR orientó su discurso nacionalista principalmente a los sectores urbanos pequeño burgueses. Su prédica instaba al rechazo del control externo por parte del capital financiero y al fortalecimiento del Estado y su rol en la economía nacional.

En su camino al poder, el MNR tuvo una importante experiencia de gobierno como aliado civil del régimen militar y nacionalista de Villarroel (1943-1946), la cual coincidió con un período de fuerte movilización obrera, vinculada al crecimiento del sector minero bajo la demanda de estaño en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Como forma de ganarse el

favor del movimiento, el MNR fomentó la sindicalización del mismo y la sanción de leyes favorables al trabajo. El caso más exitoso fue el de la creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en el año 1944, la cual pronto se constituyó en uno de los sindicatos más poderosos del mundo, núcleo de la futura Central Obrera Boliviana. La FSTMB consolidó una posición de independencia respecto del MNR, al tiempo que demostró a éste su importancia política creciente como actor organizado. En 1946 el gobierno cívico-militar tuvo su final abrupto en manos de un golpe apoyado por el conjunto de las fuerzas políticas tradicionales, las cuales impusieron una suerte de “restauración conservadora”. El MNR fue expulsado del poder y temporalmente perseguido. “Después de 1946, los incidentes violentos se incrementaron a tal punto que el país ingresó en la que fue esencialmente un estado de guerra civil”¹⁵. Los años transcurridos entre 1946 y 1952, período conocido como el “Sexenio” marcaron el ingreso definitivo de Bolivia hacia una situación revolucionaria.

Bajo el liderazgo pragmático de Víctor Paz Estenssoro, la coyuntura llevó al MNR a buscar un sustento popular masivo desde el cual llevar al país a una revolución desde abajo. El desarrollo de un perfil “popular” y revolucionario se transformó en la estrategia para recuperar el poder. El cambio en la táctica era sólo eso; en ningún momento se abandonó el espíritu elitista del partido o su tendencia a buscar un control vertical del proceso de cambio social. La opción ya definida en favor de una construcción “movimientista” llevó al MNR a acomodarse con otros sectores, principalmente con la clase obrera radicalizada en torno a un proyecto socialista-revolucionario.

Así, en los años anteriores a la revolución, el partido “era difícilmente un movimiento coherentemente unificado. En lugar de ello, el MNR de 1952 era una alianza multicefálica y multiorganizacional de grupos sociales dispares, potencialmente antagonistas”¹⁶. Dentro del mismo, “todos estos grupos interpretaron a su manera las aspiraciones ‘multiclasistas’, ‘reformistas’ y ‘democráticas’ que eran las únicas motivaciones de una estructura carente de programa pero provista de una impresionante organización”¹⁷.

¹⁴ Malloy, James. 1970, *op. cit.* 77 p.

¹⁵ *Ibid.* p. 127

¹⁶ *Ibid.* P. 163

¹⁷ Dunkerley, James. *Rebelión en las venas*. La Paz: Plural, 2003. p. 63

ii Revolución del '52 y sistema nacional: insurrección y poder obrero

La desintegración del régimen conservador tuvo su última etapa agónica en la presidencia de Urriolagoitia (1949-1951), bajo la cual la fragmentación de la elite se acentuó, en tanto la movilización social se extendió a todos los sectores urbanos: obreros, docentes, pequeños empresarios, comerciantes, etc. Desgastado, el gobierno conservador de Urriolagoitia convocó a elecciones en 1951. En tal contexto “la decisión del MNR de participar en las elecciones del 14 de mayo de 1951 fue un golpe maestro”¹⁸. En tanto la elite gobernante presentó tres candidatos, el MNR logró un importante consenso de fuerzas en relación su fórmula, incluyendo el apoyo de la izquierda externa al partido. Finalmente, el MNR logró la victoria electoral y el acceso constitucional al gobierno, en tanto las elites, en rechazo al resultado electoral, entregaron el poder a los militares.

Frente al nuevo escenario, el MNR decidió constituirse en el agente popular que concretara tal acción. No pasó ni un año antes de que la caída de la junta militar fuese un hecho más que predecible. El 12 de abril de 1952, el MNR comenzó la insurrección popular que finalmente lo condujo al gobierno como líder legítimo del frente popular revolucionario. El levantamiento armado demostró la madurez de los sectores populares urbanos, así como también el exitoso articulamiento con los mismos logrado por el MNR en los últimos años. En la insurrección participaron los cuadros pequeño burgueses del MNR, mineros, obreros y carabineros rebeldes. Las armas logradas en los primeros enfrentamientos en centros mineros fueron prontamente distribuidas en las ciudades. Pronto todo el “sistema nacional”, cada espacio gubernamental, policial y militar fue ocupado por el MNR.

Las contradicciones del MNR aún no eran evidentes pero ya comenzaban a aflorar. En tanto los líderes partidarios y cuadros intermedios hicieron explícito en su discurso el origen constitucional de su mandato fundado en la victoria electoral del '51 y reconocían una importante continuidad con el pasado institucional, las bases de izquierda desarrollaron un discurso crecientemente radicalizado y revolucionario e impulsaron el cambio a través de la acción violenta. Reformismo y revolución convivían en un equilibrio difícil sobre el cual el centro pragmático montaba un discurso ambiguo y vacío, cada vez menos efectivo. Pronto, derecha e izquierda partidaria entablaron entre sí un duelo verbal furioso. “Sin embargo, mucho había pasado desde los tempranos flirteos del MNR con el poder del Estado. Uno de los desarrollos más importantes fue la radicalización y politización del movimiento obrero y

un cambio drástico en la composición y organización del MNR”¹⁹. El movimiento obrero, ya desde temprano había previsto como inevitable la confrontación con los sectores burgueses del MNR en un contexto de radicalización necesaria del partido.

En los primeros meses de la revolución, las milicias obreras se hicieron con el monopolio de la violencia, en un contexto de desintegración de las Fuerzas Armadas, ocupando grandes extensiones del espacio nacional, entre ellas, los más importantes centros urbanos y mineros. Ganado el territorio, las bases populares y las armas, el momento de radicalizar el partido y la Revolución habían llegado. Ya el 17 de abril de 1952, un congreso obrero liderado por la FSMTB creó “lo que muy pronto habría de convertirse en el cuerpo más poderoso de la vida pública boliviana: la Central Obrera Boliviana (COB)”²⁰. La nueva organización obrera unificada e independiente, procuró la radicalización de la revolución de abril, reclamando la eliminación de toda ley antiobrera, la nacionalización de las minas y reforma agraria, la diversificación de la economía y mejoras salariales.

El movimiento obrero se movilizó intensamente en favor del cumplimiento de las promesas realizadas por el MNR antes de la Revolución. Pronto se hizo claro a los líderes del partido que la *nacionalización sin indemnización*, principal bandera obrera, era una demanda innegociable. Las presiones hacia la acción revolucionaria fueron tan intensas que finalmente los líderes pragmáticos, entre ellos el Presidente Paz Estenssoro y el Vicepresidente Siles Suazo, tomaron las primeras acciones definitivas en favor del cambio en el “sistema nacional”. Para la dirigencia partidaria, si la nacionalización era inevitable, sus límites quedaban aún por definirse. Finalmente, en octubre de 1952, la nacionalización de las propiedades pertenecientes a los “barones del estaño” fue definida por ley. La derecha partidaria y Washington se aseguraron la indemnización plena a los propietarios y la promesa de que la nacionalización de las minas tenía un carácter excepcional y limitado. La indemnización sólo fue tolerada por el movimiento obrero a cambio del cumplimiento de una demanda fundamental: el *control obrero*. A través de éste, la FSMTB se garantizó la presencia de dos representantes con derecho a veto en la mesa directiva de la recientemente creada Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Más importante aún, en el nivel de base, cada mina aseguró en su dirección la presencia de un delegado minero con derecho a veto. El control obrero permitió a la FSMTB tener una gran ascendencia sobre la principal actividad

¹⁸ Malloy, James. 1970, *op. cit.* p. 151

¹⁹ *Ibid.*, 174 p.

²⁰ Dunkerley, James. 2003, *op. cit.* p.72

económica de Bolivia, al tiempo que institucionalizó su posición como poder político y social independiente.²¹

La nacionalización de las minas fue la primera medida revolucionaria del MNR en el poder. La “forma” que esta adoptó finalmente llevó implícita dos hechos sobresalientes en la nueva estructura de poder emergente en el escenario post insurreccional. En primer lugar, mostró la difícil convivencia política existente hacia el interior del MNR, así como también la precariedad del equilibrio logrado por la dirigencia pragmática de Paz Estenssoro y el centro partidario. Más importante aún, la forma de nacionalización hizo evidente la brecha existente entre la autoridad formal y el poder real. En esta primera fase revolucionaria quien se consolidó como actor político saliente y predominante fue el movimiento obrero, el cual fortaleció su posición de poder independiente a través de la creación de la COB y la obtención del control obrero en las minas.

El poder del movimiento obrero se consolidó definitivamente en la extensión de su acción radical y revolucionaria al espacio rural, momento fundacional de su alianza con el campesinado por la cual la Revolución quedó definida en la movilización popular desde abajo.

iii La Revolución del '52 y sistema local: movilización campesina, Reforma Agraria y organización rural.

Un rasgo sobresaliente de la Revolución del '52 fue el hecho de que en un principio, sólo se limitó a aquellos espacios y actores que anteriormente definimos como pertenecientes al “sistema nacional”. De hecho, como hemos visto, el surgimiento mismo del MNR y su llegada al poder por la vía revolucionaria fueron productos directos de la crisis de dicho sistema. Ahora bien, una vez iniciada la Revolución, “a lo largo de todo el país, el sistema de poder y autoridad basado en la antigua elite se encontró en retirada”²². En el área rural, el impacto de la Revolución de abril fue inmediato y “radical al reemplazarse a las autoridades locales por funcionarios del MNR”²³.

²¹ Para mayores detalles acerca del proceso de nacionalización de las minas, consultar: Malloy, James. *Bolivia: The uncompleted Revolution*. University of Pittsburgh Press, 1970. Parte III, Capítulo 9.

²² Malloy, James. 1970, *op. cit.* p. 202

²³ Pearse, Andrew. 1986, *op. cit.* p. 343

A través de las nuevas autoridades locales el partido intentó hacerse del control del campo. Este adquirió una importancia fundamental a partir de la introducción del sufragio adulto universal, teniendo en cuenta que aproximadamente tres cuartos de la población en condiciones de votar vivía en el campo. La estrategia de las nuevas autoridades se orientó hacia la creación de una red de movilizadores y agentes rurales que garantizaran el apoyo y la movilización campesina en favor de la Revolución, así como también su integración a través de una organización oficialista y centralizada. Ninguno de estos dos objetivos pudieron ser cumplidos y esto se debió, en parte, al racismo y desinterés con los cuales se los persiguió. La mayoría de las nuevas autoridades locales y provinciales provenían de la militancia tradicional del partido, siendo en su mayoría cuadros de la clase media y pequeña burguesía que defendían las concepciones más elitistas y conservadoras de cambio político y social, y que miraban con suspicacia la idea de una alianza con los sectores tradicionales. Su preocupación respecto del espacio agrario respondía a actitudes reaccionarias y se relacionaba más con el control del campesinado que con su movilización en favor de la Revolución.

Aún así, el fracaso de los agentes oficiales se explica fundamentalmente en la rápida aparición de la izquierda obrera en el campo. La radicalización del campesinado era fundamental al objetivo obrero de profundización de la revolución. En consecuencia, la izquierda del MNR, externa a éste, trasladó su acción al campo donde, desconociendo la red de agentes estructurados en torno a las células locales del partido, estimuló el levantamiento generalizado, la conformación de milicias campesinas y la *sindicalización agraria*. En esta empresa, su gran aliado fue el Ministro de Asuntos Campesinos Ñuflo Chávez Ortiz, quien lideró esta campaña semi-oficial de sindicalización del campo. En tal sentido, “la COB, el MAC y la Federación Minera se consideraban los mecanismos de vanguardia para promover el movimiento sindical y establecer una alianza obrero-campesina”²⁴.

Armados y movilizados primero por la izquierda, luego por sus propios líderes, “los colonos bolivianos o campesinos sin tierra, dependientes de las haciendas se convirtieron en la fuerza agraria más movilizada y revolucionaria de Bolivia durante el proceso de Reforma Agraria (1952-56)”²⁵. Sobre la base de las comunidades indígenas, la organización sindical se extendió a un ritmo irrefrenable, así también lo hicieron las ocupaciones efectivas de tierras y

²⁴ Dandler, Jorge. “Campesinado y Reforma Agraria en Cochabamba (1952-53): Dinámica de un movimiento campesino en Bolivia”. *Bolivia: la fuerza histórica del campesinado*. Comp. Fernando Calderón, Jorge Dandler. Ginebra: Ginebra: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986. p. 218

²⁵ *Ibid.* p. 227

las acciones violentas contra haciendas y poblados. Entre los hacendados, administradores y ciudadanos de pueblos rurales se esparció el pánico, iniciando un continuo éxodo hacia las capitales departamentales. Las historias de la “venganza indígena” llegaron pronto a cada ciudad, donde encontraron un gran eco en la derecha del partido, que pronto asumió una postura abiertamente reaccionaria frente a la movilización rural.

La “cuestión agraria” generó dentro del MNR divisiones más profundas que la nacionalización de las minas. La derecha del partido, no sólo fracasó en su intento de controlar el campo y llevar adelante una reforma limitada, sino que ahora enfrentaba un movimiento campesino organizado y radicalizado que hacía peligrar todo el sistema de relaciones de propiedad vigente en Bolivia. Además, la reacción de derecha era exacerbada por la ascendencia que la izquierda del MNR estaba logrando en el campo, así como también por su éxito en la articulación de un movimiento popular de base nacional que estaba llevando a una radicalización de la revolución. El temor no era infundado en tanto el control efectivo que la estructura partidaria ejercía sobre los actores movilizados era más bien simbólico. A lo largo de todo el país, obreros y campesinos llevaban acabo acciones violentas, ocupaban tierras y oficinas públicas o destituían autoridades, y aún cuando lo hacían en nombre del MNR, la mayoría de las veces, su vínculo real con la estructura oficial no iba más allá de este gesto discursivo. Ante el vacío programático y la moderación e inmovilismo de las elites del partido, la movilización social desde las bases actuó como agente radicalizante de la revolución y la guió hacia objetivos concretos, que poco tenían que ver con los intereses de la dirigencia partidaria. Así, en los primeros años que siguieron a la insurrección de abril, la movilización social y acción radical desde abajo se constituyeron en la realidad política sobresaliente, y constituyeron, lo que aquí denominamos su *fase popular*.

El centro pragmático tardó tiempo en estructurar una respuesta coherente, en tanto no encontraba opción moderada posible que contentara a todas las facciones del partido. Después de meses de ambigüedades, el temor a perder completamente el movimiento campesino en manos de la izquierda y a que el mismo escapara totalmente al control de la dirigencia del MNR, llevó al centro a radicalizar su política agraria como forma de ganar sobre el mismo una posición de legitimidad y ascendencia. La situación de violencia rural hizo evidente que “... el campesinado debía controlarse a cualquier costo para preservar la revolución”²⁶. Aún así, las opciones políticas a su alcance no eran, en principio, muchas. La extendida

²⁶ Dunkerley, James. 2003, *op. cit.* p.58

movilización y organización rural impuso, en primer lugar, una política de aceptación y legitimación de lo ya actuado por el propio campesinado. “Con suerte, cumpliendo las demandas del campesinado, su identificación podría cambiar desde la izquierda hacia una posición oficial”²⁷. En consecuencia, el MNR adoptó una postura oficial favorable al sindicato agrario, el cual fue reconocido como legítimo y promovido desde el Estado. En las estructuras partidarias del “sistema local” se desplazó a los miembros de la facción de derecha y se colocó a militantes con ciertas simpatías al proceso de sindicalización. La nueva política se orientó a garantizar la adhesión al MNR desde la nueva estructura sindical. Haciendo propia la causa campesina, el centro pragmático buscó ganar el espacio rural a la izquierda obrera y partidaria.

La cuestión de la Reforma Agraria había estado hasta ese momento vagamente expresada en el discurso oficial, un punto más en el amplio programa electoral del partido. Sin embargo, por las razones mencionadas anteriormente, ya hacia principios de 1953, ésta ingresó directamente como cuestión prioritaria en la agenda nacional. Finalmente, la ley que la habilitó demostró, una vez más, la divergencia existente entre la autoridad formal y poder real en los primeros momentos de la Revolución. El carácter en la letra de la Ley de Reforma Agraria de 1953 fue fundamentalmente liberal-desarrollista, y respondió a los objetivos de desarrollo capitalista nacional profesados por la dirigencia del MNR. En la Ley se establecieron diversas formas de propiedad agrícola. Al campesino se le garantizó una propiedad *individual* desde la cual se pretendía integrarlo a la estructura económica nacional como pequeño propietario, productor y consumidor. Además de la propiedad individual campesina, se fomentó la existencia de propiedades intermedias, ligadas a las ex haciendas, y grandes empresas agrícolas del oriente boliviano, las cuales quedaron particularmente protegidas e incentivadas desde el crédito estatal y la extensión de servicios, constituyéndose en el eje del desarrollo de una estructura agrícola comercial-capitalista moderna. La derecha partidaria logró que la Ley habilitara la subsistencia de las viejas haciendas, a través de la conservación de la casa hacendal y algunas tierras, en una propiedad del tipo intermedia.

Sin embargo, después de la promulgación de la ley, la toma de haciendas por parte de los campesinos y la violencia asociada a ésta se intensificaron, en tanto con la implementación de la ley, “la redistribución efectiva de la tierra se extendió por todo el país con la ayuda de los sindicatos; casi todos los latifundios se distribuyeron entre todos unos 300.000 campesinos

²⁷ Malloy, James. 1970, *op. cit.* p. 204

en menos de un año”²⁸. Pronto, los objetivos desarrollo capitalista del MNR quedaron relegados a la acción ya no espontánea sino directa y organizada desde los nuevos sindicatos campesinos, los cuales buscaron ampliar su poder y control a través de la incorporación de tierras y la creación de nuevas estructuras sindicales.

En consecuencia, “el efecto más inmediato de la reforma y la extensión del movimiento campesino fue el colapso de la estructura agraria pre existente”²⁹. Los hacendados huyeron del campo y algunos exigieron sin éxito su derecho a conservar una propiedad intermedia, en tanto las organizaciones campesinas impidieron su regreso. Administradores, comerciantes y habitantes de los pueblos rurales siguieron el camino de los hacendados y emigraron así mismo hacia las grandes ciudades. Todo espacio de autoridad y control desapareció, y con ellos desaparecieron también los antiguos puentes entre los sistemas nacional y local. Sobre este vacío de poder, los sindicatos agrarios se constituyeron en las estructuras nucleares de la ruralidad altiplánica, estructuras persistentes de autogobierno local. La tierra individual, garantizada al campesino en la Ley de Reforma Agraria, continuó siendo administrada bajo formas comunitarias de gestión, dentro del marco sindical agrario. “Dentro de este contexto, la reforma agraria boliviana se realizó con una profunda participación social y política del campesinado, que asumió poder político efectivo en el campo y el control sobre la tierra”³⁰.

La sindicalización del campo tuvo efectos muy profundos en relación a la configuración del Estado boliviano en las décadas siguientes a la Revolución. “Considerando que la integración nacional había sido una de las grandes cuestiones en Bolivia desde 1952, el factor de *aislamiento* es más bien importante. En grandes áreas de Bolivia, los indígenas, desde el punto de vista del Estado, retornaron a una subsistencia pasiva o por lo menos, a una situación de involucramiento mínimo en la Bolivia ‘nacional’”³¹. Como veremos a continuación, en la extensión del sindicato como estructura de autogobierno rural, el sistema local en su realidad más cotidiana escapó casi por completo al control estatal central. La vida del campesino continuó definiéndose fundamentalmente en el espacio comunitario-sindical local, en condiciones de aislamiento respecto de cualquier realidad nacional emergente. Como

²⁸ Huizer, Gerrit. *El potencial revolucionario del campesinado en América Latina*. Mexico, Siglo XXI, 1977; p. 171

²⁹ Malloy, James. 1970, *op. cit.* p.208

³⁰ Dandler, Jorge. “La Ch’ampa Guerra de Cochabamba: Un proceso de disgregación política”. En: *Bolivia: la fuerza histórica del campesinado*. Comp. Fernando Calderón, Jorge Dandler. Ginebra, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986; p.247

³¹ Malloy, James. 1970, *op. cit.* p.211

también se describirá en los siguientes apartados, la integración del campesinado al sistema nacional y su control sólo se concretaron incompletamente a través de la estructuración vertical de instancias superiores de organización sindical, sin lograr la afectación de la unidad básica local, la cual continuó existiendo en forma autónoma.

iv Sindicato agrario: raíces comunitario-solidarias del autogobierno local

“Para comprender la rapidez con que ocurrió el proceso de sindicalización rural, debemos recordar que, en realidad, la célula básica de todo sistema seguía siendo la comunidad, incluyendo la comunidad campesina que estaba en la base de toda la hacienda”³². Así, el sindicato agrario se constituyó con formas y prácticas heredadas de la *comunidad indígena*, preservadas del paso del tiempo en la estructura hacendal dual descrita anteriormente³³. En consecuencia, su carácter fue marcadamente diferente al del sindicato obrero.

El sindicato agrario se estructuró como unidad de gobierno político-económico territorial efectiva y no como entidad de representación económica frente al Estado. En tal sentido, la moderna denominación de “sindicato” escondió la marcada continuidad entre éste y aquella realidad rural pre moderna sintetizada en estructuras comunitarias o *ayllus* originarios propias del espacio altiplánico, heredadas de tiempos pre coloniales. “La base organizativa regular (...), es lo que actualmente en el sector boliviano se llama ‘el sindicato campesino local’, pero que en realidad no es más que un nuevo nombre para la típica organización comunal tradicional ligeramente retocada”³⁴.

En sus orígenes el *ayllu* o comunidad³⁵, tuvo un fundamento principalmente económico-ecológico, como respuesta organizativa de las poblaciones aymaras y quechuas del altiplano

³² Albó, Xavier. “Bases étnicas y sociales para la participación Aymara”. En: *Bolivia: la fuerza histórica del campesinado*. Comp. Fernando Calderón, Jorge Dandler. Ginebra, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986; p.416

³³ La relación de continuidad entre las formas indígenas y sindicales, definidas según los patrones de desarrollo capitalista agrícola en cada región. Para una descripción más detallada, ver: Cusicanqui, Silvia. 1987, *op cit*.

³⁴ Albó, Xavier. 1986, *op. cit.* p. 407

³⁵ El *Ayllu* es la denominación indígena que encuentra su correspondencia en la “comunidad colonial” y el “sindicato agrario” moderno. En el presente trabajo, *ayllu*, comunidad y sindicato agrario serán

al desafío de lograr un acceso controlado a recursos cuya existencia era escasa y dispersa, en un contexto de micro climas hostiles. El *ayllu* permitió el uso racional y eficiente de dichos recursos, asegurando una explotación óptima y renovable de los suelos. En su fundamento económico-ecológico, el *ayllu* se reduce a una estructura de propiedad de la tierra y de relaciones de producción particular donde los derechos familiares de acceso a la tierra y a los recursos se combinan con ritmos comunitarios de producción agrícola. Las *qallpas*, sub unidades de un terreno familiar son trabajadas familiarmente bajo el sistema de *aynuqa*, el cual asegura en una zona geográfica homogénea que el trabajo se realice en un mismo ritmo comunitario de rotación y descanso de las tierras. Así, la estructura comunitaria garantiza un acceso compartido a los recursos, complementado con un único ritmo de producción familiar-comunitario.

Bajo esta lógica, el *ayllu*, comunidad o sindicato “podría definirse como aquel grupo de familias que tienen acceso a una determinada zona de terreno claramente identificada, y que están ligadas por una serie de vínculos, obligaciones y celebraciones compartidas por todas ellas y en ciertos aspectos sólo ellas, con un nivel organizativo igualmente compartido”³⁶.

En sus principios organizativos básicos encontramos una concepción profundamente horizontal e igualitaria de derechos y obligaciones compartidas, automáticamente adquiridas con el usufructo de la tierra y, por lo tanto, muy influida por la forma en la que individuo y comunidad se entrelazan entre sí a partir de las estructuras de propiedad y formas de producción anteriormente descritas. El principio “político” fundamental es el de *rotación* de cargos o *mit'a* (trabajo por turnos), como base para la designación de autoridades comunales/sindicales. A través del mismo, se busca incentivar y facilitar la participación en todos los niveles, evitándose además la concentración de poder y conformación de “caciquismos” locales. “Los casos estudiados en varias zonas del país confirman que el clima social en los sindicatos a nivel de la comunidad en general es democrático y que los líderes locales están bajo suficiente control social de parte de los miembros de la comunidad, para contener las tendencias hacia el extremo autoritarismo si llegara a ocurrir”³⁷.

El principio de rotación es reforzado por aquel que establece la *obligación* que tienen los comunarios de servir a la comunidad en el puesto por ésta definido. Por su carácter

utilizados indistintamente como forma de referencia al conjunto de estructuras y prácticas comunitario-solidarias propias del espacio rural altiplánico.

³⁶ Albó, Xavier. 1986, *op. cit.* p. 406

³⁷ Huizer, Gerrit. 1977, *op. cit.* p. 181

obligatorio, el ejercicio de la autoridad comunitaria es un servicio no voluntario, fundamentalmente una “carga” más que una posición de privilegio. Existe una extensa variedad de servicios comunitarios de carácter obligatorio, los cuales se rigen por la rotación y el turno. La horizontalidad de la autoridad se plasma en la *Asamblea* comunitaria, máximo órgano de toma de decisiones y responsable de la elección de las autoridades comunitarias.

En cierta forma, toda la estructura comunal-solidaria, descansa sobre estos dos pilares: *rotación* y *obligación*. Ellos aseguran la participación de toda la comunidad en el autogobierno local, privilegiando al colectivo por sobre las individualidades y los liderazgos locales.

Como ya hemos visto, a través de la *aynuqa*, las relaciones de trabajo se constituyen en una base fundamental para la interrelación y participación comunal, las cuales quedan consagradas en la estructura horizontal de organización política y autogobierno local, bajo los patrones anteriormente descritos. Ahora bien, el sentido “colectivo” de la comunidad encuentra otro de sus pilares fundamentales en las diversas instituciones culturales de “ayuda mutua, reciprocidad y trabajos colectivos del mundo andino”³⁸. Estas instituciones culturales originan fuertes lazos de solidaridad hacia el interior de la comunidad, definidos fundamentalmente en formas de trabajo conjunto para determinadas tareas relacionadas a obras comunitarias o de dificultosa resolución individual: construcción de viviendas, escuelas o caminos, celebración de fiestas, defensa ante peligro natural, etc. Las instituciones de ayuda mutua tienen diferentes variantes. Una de ella es el *ayni*, forma de intercambio correspondido. Otras son la *faena* o *jayma*, que suponen la ayuda de una gran parte de la comunidad, solicitado por un comunario o por las autoridades. Una vez terminada la tarea, el solicitante debe corresponder a sus compañeros invitándoles a una celebración que transforme en comida y bebida el trabajo realizado. En último lugar, existen los *servicios comunales extraordinarios*, son proyectos comunitarios decididos en Asamblea, relacionados al espacio común, a su mantenimiento y desarrollo. La Asamblea, asesorada por una comisión previamente establecida decide bajo qué formas se organizará el trabajo de la comunidad. Estos proyectos son la instancia máxima de participación comunitaria en trabajo colectivo. Los trabajos comunitarios son limitados en tiempo y recursos, como forma para que la comunidad ejerza cierto control, y de que el principio de rotación se continúe aplicando. Este

³⁸ Albó, Xavier. “Retornando a la solidaridad y faccionalismo aymara”. En : *Violencias y estrategias colectivas en la región andina*. Lair, Eric (Ed.). Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2004 ; p. 449

sentido limitado de las tareas comunitarias, que son puntuales y bien definidas, tiene como principal finalidad la no institución de una práctica inmodificable.³⁹

Finalmente, la interrelación y participación hacia el interior de las comunidades se encuentran fuertemente ligadas a las prácticas ceremoniales que, en gran medida, las legitiman simbólicamente.

Las implicancias “culturales” de esta estructura agraria particular del altiplano son muy profundas. En primer lugar, en la complementariedad cotidiana, individuo y comunidad se vuelven inseparables el uno del otro. La palabra *comunario*, define al campesino altiplánico no por su referencia al individuo, sino por su pertenencia a una comunidad. En tanto tal individuo encuentra su supervivencia atada a la comunidad, su empeño se dirige hacia la perpetuación de la misma, dando origen a un conjunto complejo de interacciones sociales y ceremoniales a través de las cuales su unión se consolida. En segundo lugar, la coordinación y complementariedad individuo-comunidad no es otra que aquella individuo-individuo, extendida a todos los miembros de la comunidad. Como hemos visto, las prácticas de trabajo regidas por la *aynuqa*, así como también aquellas prácticas políticas basadas en la rotación y la obligación en el ejercicio de cargos, contribuyen a una concepción del individuo en extremo igualitaria. Sin posiciones ni jerarquías, la comunidad instituye la condición de igualdad como requisito necesario para la supervivencia de todos. Esta concepción es fuertemente reforzada bajo las prácticas de trabajo común y las celebraciones colectivas.

Dicho lo anterior, vale aclarar que, en el presente trabajo, no pretendemos sostener una “idealización antropológica” del ayllu-comunidad-sindicato. Debemos aclarar que, en los hechos, la continuidad entre estas estructuras no ha sido necesariamente completa. Inevitablemente, como veremos en el siguiente capítulo, en las décadas siguientes a la revolución la realidad de la comunidad-sindicato se vio fuertemente alterada por diferentes procesos: incorporación del campesino al mercado nacional, extensión del minifundio improductivo, pobreza y migración. Estos procesos conllevaron una creciente *individuación* del campesinado, sobre todo en su rol como productor, degradando el fundamento económico-ecológico de la comunidad, en muchos casos representado la desaparición de la *aynuqa*. Sin embargo, como también veremos en los siguientes capítulos, estos procesos de individuación se en ausencia de un proceso expansivo de modernización económica y social, bajo formas individuales de trabajo asalariado; lo que se manifestó en la extensión de las

³⁹ Albó, Xavier. 1986, *op. cit.*

estructuras y prácticas propias de la comunidad del altiplano, definidas en la continuación de formas de economía familiar de subsistencia, base para la asociación solidaria. En la *marginalidad* de su existencia, la comunidad- sindicato, tanto en sus estructuras, como en sus significados políticos, sociales y culturales más profundos, continuó ofreciéndose al campesino como única alternativa de supervivencia, aún más allá de su espacio rural-altiplánico tradicional.

Los detalles acerca del carácter particular que adquiere el sindicato agrario son centrales al argumento que aquí se desarrolla. Recordemos que, en las movilizaciones del 2000-2005, son sus estructuras y prácticas comunitario-solidarias, extendidas territorialmente y reformadas más allá de sus formas tradicionales, las que, sustentan, definen y articulan al conjunto de los actores sociales movilizados, siendo su capacidad de control social y territorial una fuente de alta efectividad en la acción colectiva.

v *Sindicato agrario y organización sindical: carácter dual de la organización rural e integración limitada y subordinada.*

Si como hemos visto, el MNR perdió el campo para sus objetivos económicos de desarrollo capitalista, logró en cambio un gran éxito en su cooptación política. Ya hemos descrito como la instauración del sindicato agrario a lo largo de toda la extensión altiplánica consolidó un espacio de autonomía local que el MNR o el Estado mismo no iban a poder ocupar efectivamente aún hasta hoy. Frente a esta realidad, el MNR desistió en su objetivo de lograr para sí el control directo y efectivo del sistema local. En su aceptación del sindicato agrario como el nuevo intermediario entre el Estado y el movimiento campesino, el MNR dirigió todo su empeño hacia la consolidación de una estructura sindical agraria que, sobre la base del clientelismo y la cooptación política, respondiera a sus intereses y asegurara, sobre todo, “lealtad electoral”. En los centros de mayor actividad sindical, como los Valles de Cochabamba o la región de los Lagos, se buscó la superación de la instancia sindical local a través de la construcción de liderazgos campesino-sindicales de ascendencia nacional.

Con la extensión del sindicato rural, se consolidó una tendencia muy marcada hacia la fragmentación del campesinado, tendencia ya presente en el sistema de haciendas. Los celos locales y las disputas por el territorio y la jurisdicción política sobre el mismo acentuaron este

carácter fragmentario del campesinado altioplánico, al tiempo que impidieron que éste constituyera un movimiento nacional unificado e independiente similar al logrado por los obreros en la COB. Además, “al nivel de objetivos, una vez logradas las tierras y la salida del patrón, los sindicatos de las haciendas perdieron su ímpetu como organización vertical”⁴⁰ para reconstituirse en organizaciones horizontales de administración local.

Este vacío permitió el surgimiento y consolidación de liderazgos regionales que, sobre la base de ambiciones personales, establecieron vínculos estrechos con el sistema nacional desde los cuales movilizaron y distribuyeron los recursos necesarios para asegurarse sus propios apoyos locales. Así, “el ‘jefe’ surge como un nuevo ‘tipo’ social”⁴¹ intermediario directo entre el Estado y el campesinado local. Su poder residió en el control efectivo que sobre el territorio ejercía, y en su consecuente capacidad de asegurar votos y estabilidad al MNR. Asimismo, su ascendencia sobre el campesinado local era asegurada a través de los recursos que el Estado le proveía. A partir de los apoyos recibidos por los distintos liderazgos partidarios, estos “jefes” campesinos extendieron su poder y construyeron estructuras sindicales en los niveles provinciales y departamentales, a través de las cuales consolidaron una posición de poder frente al Estado. “El cacique obtenía la obediencia y el apoyo de los dirigentes de base en cuestiones extra-locales, al mismo tiempo que se abstenía de interferir en asuntos intra-locales”⁴². En estos liderazgos regionales, el MNR encontró la posibilidad de ejercer importante influencia y control sobre el campesinado, alternativa aceptable frente a la imposibilidad de integrarlo efectivamente desde las bases.

La lógica de construcción de poder detrás de la nueva estructura sindical federativa se alejó por completo de aquella de autogobierno horizontal consagrada en la unidad sindical local. “Al nivel provincial, departamental o nacional, los dirigentes no sólo no son elegidos democráticamente, sino por designación del gobierno central”⁴³. Esto dio al proceso de organización del campo un *carácter dual* que es central al argumento que en la presente investigación se sostiene, en tanto aseguró la continuidad del espacio autónomo rural. En el nivel local el sindicato continuó respondiendo a las formas y objetivos de la comunidad, como espacio de organización horizontal de las bases y la autoridad y como mecanismo de autogobierno local. En los niveles superiores (central provincial, federación departamental y

⁴⁰ Albó, Xavier. 1986, *op. cit.* p. 417. Malloy también sostiene que “una vez asegurada la tierra, la mayoría de los campesinos no estuvo dispuesto o no pudo actuar como una fuerza colectiva nacional”. Malloy, James. 1970, *op. cit.* p. 272

⁴¹ Malloy, James. 1970, *op. cit.* p.215

⁴² Pearse Andrew. 1986, *op. cit.* p.359

confederación nacional) el sindicato se estructuró progresivamente como organización vertical de vinculación frente al Estado. Estos niveles se constituyeron en ámbitos crecientemente autoritarios, regidos por la lógica de la conveniencia política, el patronazgo y el clientelismo. En tanto el nivel local surgió y se consolidó como espacio organizativo autónomo e independiente, los niveles superiores fueron, como veremos en breve, crecientemente absorbidos por el Gobierno e incorporados subordinadamente al esquema político nacional. “Este proceso minó y finalmente borró el carácter originalmente democrático de la participación agraria en el Movimiento.”⁴⁴

La Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB) fue la estructura pivote entre el Estado y el sindicato local. A ella se integraron las sub centrales, centrales provinciales y federaciones departamentales. La situación de la CNTCB era de completa dependencia del Gobierno. Financieramente, su estructura se sostenía a través de los recursos que el Ejecutivo entregaba en concepto de salarios y gastos administrativos. Así, sus integrantes pasaban a formar parte de la burocracia oficial⁴⁵.

El carácter dual de la organización sindical tuvo un efecto más bien ambiguo: en tanto aseguró, al MNR primero y a los sucesivos gobiernos militares que lo sucedieron después, un control eficiente del actor campesino en el nivel nacional, también impidió el control real del espacio local, el cual permaneció fragmentado, autogobernado y autónomo.

En el presente capítulo hemos intentado describir las consecuencias profundas que la Revolución generó en la estructura social y política de Bolivia. Dos de ellas presentan una particular importancia al argumento que en el presente trabajo se desarrolla. En primer lugar, los sucesos ocurridos en el campo definieron en forma fundamental la conformación de un *sistema local* organizado en forma autónoma y horizontal. Como hemos visto, en el espacio rural altiplánico, toda presencia estatal fue eliminada junto con la estancia; en tanto el gobierno revolucionario se vio forzado a reconocer al sindicato agrario como estructura nuclear de organización política, económica, social y cultural. La movilización campesina de base logró instituir en todo el espacio altiplánico el sindicato agrario, habilitando la supervivencia de estructuras y prácticas colectivo-solidarias de integración social autónoma.

⁴³ Huizer, Gerrit. 1977, *op. cit.* p.182

⁴⁴ Cusicanqui, Silvia. 1987, *op. cit.* 77 p.

⁴⁵ Huizer, Gerrit. 1977, *op. cit.* 179 p.

En el próximo capítulo, veremos cómo el modelo de desarrollo instaurado con posterioridad a la *fase popular* de la revolución y los procesos económicos propios al mismo generaron tuvieron consecuencias ambiguas en el sistema local. En tanto espacio marginal respecto del proceso de modernización económica, el nuevo modelo de desarrollo definió la continuidad de las estructuras económicas y sociales del espacio rural tradicional. Sin embargo, la misma ausencia de modernización derivó en el empobrecimiento progresivo de la población campesina y su migración masiva, la cual determinó una progresiva expansión y dispersión geográfica-demográfica de las sociedades tradicionales y, fundamentalmente, la readaptación de sus estructuras y prácticas comunitario-solidarias.

La otra consecuencia profunda de la Revolución, fue su fracaso en el objetivo original de integrar completamente los *sistemas local y nacional*. La ausencia de una integración efectiva quedó definida, en parte, en el proceso mismo de sindicalización rural y autonomización social anteriormente descrito. Sin embargo, como veremos a continuación, la misma fue profundizada en la definición de un modelo de desarrollo que privilegió la expansión de la empresa agro industrial del oriente y la continuación de una industria de enclave minera y petrolera, por sobre el desarrollo industrial urbano o capitalista rural. Dicho proceso aseguró la emergencia de una estructura estatal post revolucionaria crecientemente diferenciada territorial, económica y socialmente, anclada en una relación desigual de subordinación política y depredación económica.

I. *La restauración conservadora*: desarrollo económico limitado, diferenciación estructural y perpetuación de la lógica agraria tradicional, 1956-1982

En el capítulo que se presenta a continuación, abordaremos en forma diferenciada los desarrollos políticos y económicos relevantes a nuestro argumento. En relación a los primeros, explicaremos la forma bajo la cual transcurrió la desarticulación del movimiento popular a través de la represión del movimiento obrero y la ruptura de su alianza con el campesinado, concretada en la cooptación definitiva de los liderazgos sindicales rurales. En cuanto a los segundos, veremos cómo la forma limitada de modernización económica capitalista bajo el nuevo modelo de desarrollo, no sólo perpetuó las estructuras económicas y sociales del espacio agrario tradicional sino que, además, determinó las condiciones para su expansión y reconversión fuera del altiplano rural.

i. La “revolución conservadora”: estabilización económica, ruptura del pacto obrero-campesino y caída del MNR.

Como hemos visto hasta ahora, “los primeros cuatro años del período post insurreccional pertenecieron a la COB y los trabajadores”⁴⁶ que, en alianza con el movimiento campesino, impusieron un proyecto revolucionario radical. Sin embargo, la llegada de Hernán Siles Suazo (1956-1960) a la presidencia marcó el comienzo del declive del poder obrero en el gobierno y abrió un largo proceso de reconfiguración de la estructura de poder post revolucionaria, la cual implicó la sujeción y desactivación del movimiento campesino.

La prioridad de la nueva administración fue, desde un principio, lograr la estabilización macroeconómica, a través del retorno a los principios del libre mercado, y revertir los efectos negativos del contexto inflacionario, adjudicados a la irresponsable “economía popular” sostenida en los primeros años de la revolución. Actuando en consecuencia, el gobierno definió un perfil de acercamiento a los Estados Unidos, definido en la aceptación del “Plan de Estabilización” ortodoxo que éstos y el FMI ofrecieron a Bolivia, el cual incluía el

⁴⁶ Malloy, James. 1970, *op. cit.* 231 p.

congelamiento de salarios y beneficios, la remoción de los subsidios a los alimentos y los controles de precios, la reducción del gasto gubernamental, etc. Este plan marcó la inauguración de una estrecha relación con Washington, sostenida y profundizada en las décadas siguientes, a través de la cual los Estados Unidos lograron una influencia creciente sobre los rumbos de la revolución y la definición del nuevo patrón de desarrollo económico. Estos años significaron la apertura de un nuevo ciclo histórico para Bolivia, definido por un proceso de reestructuración económica que viene a completarse con las reformas neoliberales y que acarrió profundos cambios en el nivel de la configuración del espacio estatal boliviano.

El plan de estabilización llevó al gobierno hacia el choque directo e inevitable con la izquierda obrera. La reversión de los subsidios alimenticios y el levantamiento de los controles de precios afectaron principalmente a los salarios reales del sector minero. La nueva política gubernamental suscitó profundos enfrentamientos hacia el interior de la izquierda “y el régimen se encontró en una excelente posición para enemistar a importantes sectores del movimiento obrero con los dirigentes de la COB”⁴⁷. Moviéndose pronto hacia la ofensiva y contando con el respaldo de aquellos sectores del trabajo menos afectados por la política de estabilización, el presidente Siles Suazo encaró el proceso de depuración de la COB. Su arma fueron los “bloques reestructuradores” a través de los cuales “se impusieron nuevas directivas y se crearon organizaciones paralelas dentro del movimiento sindical con el fin de decapitar a la COB, la Federación de Mineros, los sindicatos y silenciar así su orientación clasista y antiimperialista”⁴⁸.

Sin embargo, el gobierno no pudo controlar el espiral de violencia obrera, la cual se manifestó en amenaza directa a su autoridad. El desafío central se presentó en la cuestión del control de las minas, bastión de la resistencia de izquierda. Frente a éste, el gobierno de Siles se vio forzado “a reorganizar la estructura de alianzas del MNR”⁴⁹ y construir una base de poder propia lo suficientemente poderosa para imponer la nueva política revisionista. Bajo esta nueva orientación, se buscó un giro en la relación entre el Estado y el movimiento campesino, orientado a lograr el apoyo efectivo del campesinado a la política oficial y a lograr el quiebre de su alianza con el movimiento obrero.

⁴⁷ Dunkerley, James. 2003, *op. cit.* p. 122

⁴⁸ Dandler, Jorge. “La Ch’ampa Guerra de Cochabamba: Un proceso de disgregación política”. *Bolivia: la fuerza histórica del campesinado*. Comp. Fernando Calderón, Jorge Dandler. Ginebra: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986. p. 251

⁴⁹ *Ibid.* p. 251

Como hemos visto en el capítulo anterior, en los meses que siguieron a la revolución, el campesinado se movilizó autónomamente, constituyéndose en fuerza radical dentro de la revolución. La conformación de sindicatos agrarios y milicias armadas otorgaron al movimiento campesino una posición de poder e independencia en el espacio rural. Sobre esta realidad, aquellas figuras que emergieron como líderes campesinos fueron construyendo estructuras de poder local-regional, desde las cuales, muchas veces, impusieron sus demandas directamente al Estado. “En todos los casos, las demandas eran apoyadas por la amenaza de la fuerza organizada, implementada en diferentes momentos, en la invasión de oficinas partidarias locales, la amenaza a los poblados, o el bloqueo de un área y la restricción del tráfico a lo largo de la misma”⁵⁰.

Sin embargo, en los primeros años de la Revolución, la competencia por la hegemonía local-regional llevó hacia un enfrentamiento creciente entre los “caciques” del movimiento campesino. Este contexto rural de lucha facciosa permitió al MNR interferir decisivamente en la competencia por el liderazgo, orientando los recursos del Estado en favor de uno u otro contrincante. Así fue que, ya bajo el primer gobierno de Paz Estenssoro, los líderes campesinos comenzaron a definir un “perfil” crecientemente nacional. Fue el gobierno de Siles Suazo el que, en su búsqueda de apoyos al plan de estabilización económica, definió una política clara orientada a explotar inteligentemente aquellos conflictos existentes entre las elites sindicales locales, incorporándolos al “sistema nacional” y asegurando a alguno de los bandos en pugna una posición decisiva dentro del Estado, desde la cual construir hegemonía regional. Esta estrategia tuvo su mayor éxito en Cochabamba⁵¹. “Fue Siles quien designó al primer campesino en el Ejecutivo nacional, haciendo de José Rojas el Ministro de Asuntos Campesinos”⁵². La eficacia de la política de cooptación de los liderazgos campesinos se comprobó en la movilizó decisiva de las milicias campesinas cochabambinas que llevaron adelante la represión de las huelgas mineras del departamento de Oruro. Violentamente, esta acción definió la ruptura del pacto obrero-campesino.

El éxito oficial logrado en la movilización del apoyo campesino delimitó dos tendencias a consolidarse en el futuro: en primer lugar, definió el final de la *fase popular*, la cual se manifestó en la ruptura de la alianza obrero-campesina y en el quiebre de la configuración de

⁵⁰ Malloy, James. 1970, *op. cit.* 271 p.

⁵¹ En los meses que siguieron a la Revolución del 52’, Cochabamba se convirtió en un centro importante de actividad sindical agraria. Se calcula que en esos momentos existía en ese departamento 1200 sindicatos activos, con un total de 200.000 miembros. Huizer, Gerrit. 1977, *op.cit.* 169 p.

⁵² Malloy, James. 1970, *op. cit.* 240 p.

poder emergida inmediatamente después de la insurrección del '52. En segundo lugar, el éxito de la nueva política gubernamental frente al campesinado definió una tendencia progresiva hacia la manipulación del mismo, concluida en su inhibición como actor político independiente en el sistema nacional, síntoma del freno definitivo al ímpetu revolucionario original.

A través de su política de represión del movimiento obrero y cooptación del actor campesino, la administración de Siles finalmente logró generar cierta estabilidad en el sistema político, basada en un tenso equilibrio de fuerzas. En el debilitamiento del movimiento obrero, la derecha partidaria reforzó su posición. Sin embargo, en la nueva situación, la hegemonía escapó a ambos bandos.

En su dimensión más profunda, el cambio de rumbo político y económico definido por Siles inauguró un largo proceso de reconstrucción de la estructura del poder en el sistema nacional; proceso signado por la lucha por la hegemonía política, bajo la cual, el MNR finalmente se desarticuló. En este contexto de competencia por el poder político, el control del campesinado se volvió un elemento clave para garantizar al gobierno de turno una mínima estabilidad.

A partir de las elecciones generales de 1959, el conflicto por la hegemonía política llevó al enfrentamiento progresivo y a la división hacia el interior del MNR. La facción de derecha abandonó el partido en 1959, formando su propia estructura política, definida en el Partido de la Revolución Auténtica (PRA). En 1963, la izquierda obrera terminó de romper con el partido, y formó el Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN). El MNR oficial quedó limitado a la figura de Paz Estenssoro y sus cuadros tecnocráticos, estructura en agonía, crecientemente dependiente de su alianza con el campesinado y del apoyo de las Fuerzas Armadas, recientemente reconstituidas.⁵³

En el nuevo contexto, la tendencia hacia el inmovilismo y bloqueo político en el sistema nacional se consolidó, propia de una estructura de poder donde ninguna fuerza era capaz de hegemonizar el desarrollo de la sociedad. Este contexto sólo pudo ser virtualmente superado con la intervención directa de las Fuerzas Armadas, las cuales en 1964 desplazaron a Paz Estenssoro de la presidencia y se alzaron con el gobierno. Los sucesivos gobiernos militares consolidaron su posición a través de la profundización de la represión y desarticulación del

movimiento obrero, al tiempo que se aseguraron la integración y cooptación definitiva del campesinado, a través de la integración vertical definitiva de los líderes campesinos regionales, concretada en 1964 en el “Pacto Militar-Campesino”. A partir de este momento, el movimiento campesino quedó inhibido de actuar como actor nacional independiente. Sin embargo, en el nivel local, el sindicato campesino continuó existiendo como estructura autónoma de integración social y autogobierno territorial.

ii Desarrollo capitalista desigual y excluyente: emergencia de la economía oriental y crisis del espacio económico occidental.

La situación de inmovilismo político en el sistema nacional, contrastó con el dinamismo presentado en la estructura económica. Como veremos en el presente apartado, el fin de la fase popular de la revolución permitió la definición de un nuevo modelo de desarrollo económico que, lejos de asegurar un desarrollo capitalista integrado, perpetuó la economía de enclave y la diferenciación regional, como condición para el desarrollo de una estructura económica “moderna” en el espacio oriental. La definición de este nuevo modelo de desarrollo capitalista *desigual* tuvo profundas consecuencias en el nivel de las estructuras económicas, políticas y sociales de Bolivia. Su progreso fue redefiniendo una realidad estatal de carácter *dual*, caracterizada por el estancamiento y ausencia de modernización del “espacio occidental” (local-nacional) sobre el cual procedió la emergencia de la nueva estructura de dominación política-económica oriental, más tarde consolidada en la práctica económica neoliberal. En tal sentido, “la restauración oligárquica post 52 será un proceso de contrarreforma y de drástica reducción de la autonomía relativa del Estado respecto de la clase dominante, impulsado por los mismos gobiernos del MNR y luego por las dictaduras militares, decurso que terminó consolidándose con el advenimiento del neoliberalismo.”⁵⁴

Con posterioridad a la aplicación del Plan de Estabilización Económica, Siles legó a su sucesor Paz Estenssoro (1960-1964) una economía estable aunque inmovilizada. Bajo un proyecto modernizador, “Paz hizo del desarrollo económico la piedra angular de su administración.”⁵⁵ En su diagnóstico inicial sobre la realidad económica boliviana, el mayor obstáculo al desarrollo fue definido en la baja productividad del trabajo, fundamentada en el

⁵³ Dunkerley, James. 2003, *op. cit.*

⁵⁴ Orellana Aillón, Lorgio. *Nacionalismo, populismo y régimen de acumulación en Bolivia. Hacia una caracterización del gobierno de Evo Morales*. La Paz: CEDLA, 2006. p. 12

poder obrero y su falta de disciplina. En tal sentido, Paz profundizó la política de represión del movimiento obrero iniciada por Siles, cuestionó el cogobierno, el control obrero y finalmente obligó a la izquierda refugiada en las minas a capitular ante las Fuerzas Armadas y las milicias campesinas movilizadas oficialmente. Las minas sufrieron congelamiento de salarios, cierre de pulperías, recorte de beneficios y reducción de la fuerza laboral.

El otro gran obstáculo al desarrollo y diversificación de la economía se identificó en la escasez crónica de capitales económicos. La estrategia frente a ésta tuvo un doble carácter. En primer lugar, se orientó a reforzar la relación con los Estados Unidos y a promover condiciones favorables al capital internacional, el cual concentró su presencia en el sector de la minería y los hidrocarburos, la agroindustria y las actividades de importación-exportación. Consciente de que Bolivia no conseguiría en el exterior la totalidad de los fondos necesarios para su desarrollo, Paz buscó sustentar el mismo con una base importante de capitales nacionales, constituyendo a la COMIBOL en el principal agente de financiamiento de la ampliación de la base económica y productiva, a través de la transferencia masiva de recursos y descapitalización de la empresa pública. “El incipiente desarrollo del mercado interno y de la industria son resultados ínfimos comparados con el drenaje del excedente minero, canalizado por el Estado hacia las nuevas fracciones capitalistas, interesadas en generar ganancias a partir de la comercialización de materias primas.”⁵⁶

En relación al proyecto de revolución capitalista conducida desde Estado, “en su visión de largo plazo, Paz vio el futuro de Bolivia en el este, en la agricultura, y en el petróleo”⁵⁷. En el momento de la Revolución del '52, Bolivia era una realidad territorial ínfima comparada a su realidad actual, y sólo se limitaba al espacio hoy definido como “occidental”. A partir de la segunda administración de Paz Estenssoro, en el proyecto de integración y desarrollo de una estructura económica diversificada de los sucesivos gobiernos, la conquista efectiva del *oriente* (departamentos de Santa Cruz y Beni; ver *mapa*) se constituyó en la primera prioridad de la política económica. De esta manera, la revolución capitalista que la movilización campesina había abortado en el altiplano fue exitosamente potenciada en el espacio oriental, definiendo una nueva estructura económica agroindustrial fuertemente capitalizada y orientada hacia el mercado externo, con una industria de enclave concentrada en los hidrocarburos, particularmente el petróleo y el gas.

⁵⁵ Malloy, James. 1970, *op. cit.* p. 290

⁵⁶ Orellana Aillón, Lorgio. 2006, *op. cit.* p. 3

El desarrollo de esta región oriental, convertida hoy en la “medialuna productiva” y motor de la economía boliviana, supuso una transferencia importante de recursos materiales y financieros. A través de la cesión masiva de tierras⁵⁸, el latifundio y el poder del hacendado se reinstituyeron bajo nuevas formas empresariales⁵⁹, promovidos desde el Estado por una alta inversión en infraestructura, fácil acceso al crédito productivo, transferencia de maquinarias y asesoramiento técnico oficial. “En cuanto al crédito ha tendido un efecto importante en la ampliación del área agrícola y en el desarrollo de la agroindustria en Santa Cruz, ha sido poco accesible al pequeño agricultor andino”⁶⁰. Entre 1950 y 1982, el 55% del crédito otorgado por el Banco Agrícola de Bolivia fue absorbido por el departamento de Santa Cruz, en tanto, en 1971 el área agrícola moderna situada en el oriente boliviano recibió el 76,3 % del total del mismo, en tanto la economía campesina sólo accedió a un 1,3%. En 1977, el monto total percibido por la región oriental ascendía al 81%. En tanto en 1979, el 69% de las deudas mantenidas con el Banco Agrícola pertenecían a las grandes empresas familiares orientales.

“Mediante esas acciones el Estado se convirtió en el factor decisivo para el desarrollo de una agricultura comercial de envergadura y el surgimiento de sectores dinámicos empresarios modernos”⁶¹, el cual el cual se desarrolló además gracias a sus importantes lazos con el capital financiero internacional.⁶² El desarrollo del poder económico de ambos actores, empresariado nacional y capital internacional, definió para éstos un peso creciente en la elaboración de la política económica nacional. Más importante aún, la política de desarrollo fomentada por el Estado, inhibió el desarrollo industrial del espacio urbano occidental así como también la modernización de la estructura agraria del altiplano, limitando las posibilidades de modernización económica y local y, fundamentalmente, habilitando la continuidad de aquellas formas campesinas premodernas de organización económica y social.

⁵⁷ Malloy, James. 1970, *op. cit.* 298 p.

⁵⁸ Se calcula que 32 millones de hectáreas sobre un total de 36 millones otorgadas por el Concejo Nacional de Reforma Agraria son propiedad de empresas privadas. Patzi Paco, Felix. *Insurgencia y Sumisión. Movimientos indigeno-campesinos (1983-1998)*. La Paz: Comuna, 1998; 131 p.

⁵⁹ Las unidades empresariales instituyeron relaciones de semi- esclavitud con las poblaciones indígenas nómadas del oriente, bajo formas de explotación individual. Patzi Paco, Felix. 1998, *op. cit.* p. 22

⁶⁰ Demeure V., Juan. “Agricultura. De la Subsistencia a la Competencia Internacional”. *Bolivia en el Siglo XX. La formación de la Bolivia Contemporánea*. Comp. Prudencio Campero, Fernando. La Paz: Harvard Club de Bolivia, 1999. 280 p.

⁶¹ *Ibid.* 279 p.

⁶² “La llamada minería mediana y la agroindustria cruceña emergieron y se expandieron fuertemente vinculadas a los créditos e inversiones extranjeros.” Orellana Aillón, Lorgio. 2006, *op. cit.* p. 3

En el espacio rural tradicional, como hemos visto, la *cuestión agraria* ingresó al Estado nacional a partir de la Revolución del '52, a través de la movilización crecientemente violenta del campesinado, el cual se organizó autónomamente e inició el proceso de destrucción de las haciendas, a través de la toma efectiva de tierras. En tal sentido, como también hemos visto, la Ley de Reforma Agraria surgió como intento del MNR de ganar alguna legitimidad en el movimiento campesino, institucionalizando lo ya actuado por sus bases. Con tal objetivo, la distribución de títulos de propiedad se constituyó en la herramienta privilegiada de acción oficial en los años inmediatamente posteriores a la reforma, siendo su fin político-social más que desarrollista. De hecho, en el espacio occidental no existió nada parecido a una política agraria integral, en tanto el otorgamiento de títulos de propiedad no fue complementado por ningún otro tipo de política oficial orientada hacia el desarrollo de una agricultura productiva y competitiva. “La Reforma Agraria cumplió prioritariamente la función de estabilización social respecto al sector mayoritario del país y no constituyó el elemento sustancial de la política agraria del Estado, que fue orientada a la expansión de nuevas fronteras agrícolas y de un desarrollo capitalista en el campo en función de la creación de grandes empresas agro-ganaderas de exportación”⁶³.

En el mediano plazo, esta aplicación de la Reforma Agraria, de carácter sumamente limitado, acarrió una progresiva parcelación de la tierra, aumentó el costo en trabajo e impidió la mecanización del proceso productivo⁶⁴. A su vez, la creciente presión demográfica acentuó el proceso de fragmentación de la propiedad agrícola “tradicional”, siendo una de las causas primeras de la extensión del *minifundio improductivo*⁶⁵, tan propio del altiplano actual.

En la región del altiplano, el campesino continuó viviendo (aún hasta hoy) bajo una economía parcelario- familiar de subsistencia. Sus posibilidades de ahorro eran escasas, por lo que gran parte de la producción era destinada al autoconsumo. Aún así, inserta en el proceso de desarrollo económico desigual aquí expuesto, esta economía de subsistencia no pudo constituirse en realidad efectivamente autónoma, sino que se vio fuertemente afectada en los

⁶³ Lavaud, Jean Pierre. “Los campesinos frente al Estado”. *Bolivia: la fuerza histórica del campesinado*. Comp. Fernando Calderón, Jorge Dandler. Ginebra: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986. 248 p.

⁶⁴ Albó, Xavier. *¿Bodas de Plata? o Requiem por una Reforma Agraria*. La Paz: Centro de Investigación y promoción del campesinado (CIPCA), 1979.

⁶⁵ En 1984, “del total de explotaciones agropecuarias, el 67.36% de ellas comprende a las menores de 4,99 hectáreas, las que disponen del equivalente al 1,4 por ciento de la superficie total. A su vez, las explotaciones de superficies mayores a las 500 hectáreas, constituyen el 1,5 por ciento del total y concentran el 85,36 por ciento de la superficie.” Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el

vínculos establecidos con el mercado con posterioridad a la Reforma Agraria. En su nuevo rol como consumidor, el campesino estableció una dependencia creciente de la “moneda” para financiar su consumo de productos no alimenticios y de primera necesidad, lo que lo obligó a buscar colocar en el mercado sus excedentes agrícolas. El carácter escasamente competitivo de éstos últimos se manifestó en bajos ingresos a un productor agrícola que, además, enfrentó una suba constante en los precios de los productos de consumo. Así, el altiplano se estructuró como espacio de transferencia de excedentes hacia otros sectores, consolidando una creciente desigualdad en los términos de intercambio entre campo y ciudad, bajo una posición subsidiaria.⁶⁶ De esta forma, el productor campesino “subvenciona a la sociedad urbana regalándole su trabajo en forma directa o a través de sus productos.”⁶⁷

En la medida en que los precios de los productos que el campesino consumía crecieron más que aquellos de los que producía, éste se vio forzado a producir un mayor excedente, hecho que determinó la alteración del sistema de rotación de cultivos y redujo la productividad de los suelos por su erosión. La extrema parcelación de la tierra y la búsqueda de maximizar el excedente agrícola condujeron a la alteración del equilibrio ecológico-económico característico de la ruralidad altiplánica, presentado en el capítulo anterior. Aquí se encuentra la otra causa, tal vez la principal, de la extensión del minifundio improductivo. A partir de los '70, la tasa de crecimiento agrícola descendió más allá del nivel de crecimiento demográfico, por lo que el altiplano se constituyó en un espacio de expulsión constante de excedente poblacional hacia otros espacios y actividades económicas.

Es importante destacar que los procesos de pauperización rural y de migraciones campesinas no llevaron a la desaparición de los espacios comunitarios tradicionales por dos motivos: en primer lugar, las migraciones las realiza fundamentalmente el excedente poblacional; en segundo lugar, la población del Altiplano rural continuó aumentando a un ritmo (entre 1950 y 1976) del 1%. Además, como veremos más adelante, las formas comunitarias tradicionales no sólo no desaparecieron sino que, en el contexto de desarrollo capitalista limitado y de estancamiento de la economía Estatal, se extendieron en la nueva población migrante que, frente a la ausencia de una alternativa económica y social viable, expandió la *lógica agraria tradicional*, comprendida en una economía de unidades familiares de subsistencia, las cuales gestionan el espacio territorial en forma colectiva y horizontal, bajo

Desarrollo Latinoamericano (CIEDLA). *Los Partidos Políticos en América Latina*. Buenos Aires: CIEDLA, 1991. p. 37.

⁶⁶ Albó, Xavier. 1986, *op. cit.* pp. 426-427

⁶⁷ *Ibid.* p. 428

estructuras y mecanismos similares a los de la comunidad agraria tradicional, reactualizados y adaptados a los nuevos espacios, urbanos y rurales.

Basándonos en lo dicho hasta aquí, podemos ver cómo, en el “imaginario desarrollista” de los grupos gobernantes, la modernización económica cobró un sentido más bien peculiar y limitado. En tal sentido, el modelo económico no se orientó hacia el desarrollo de un verdadero mercado interno y una industria urbana nacional, ni estructura agrícola capitalista, en tanto su intervención se dio en áreas territorial y sectorialmente limitadas, además de particularmente poco articuladas con el resto de la economía y con una capacidad mínima de absorción laboral. Así se constituyó la gran la gran paradoja del “desarrollo boliviano” en las décadas posteriores a la revolución, referida a un proceso de modernización económica *limitado* en su geografía y sus beneficiarios que avanza a expensas del empobrecimiento y atraso de la antigua estructura económica (¡tanto rural como urbana!), empujando a la migración de sus poblaciones excedentarias, a las cuales, la nueva economía moderna no tiene nada que ofrecer. Así, al tiempo que el desarrollo capitalista limitado avanzó a condición del estancamiento y atraso de la economía agraria campesina, también habilitó su extensión y reproducción fuera del altiplano.

iii El Banzerato: la profundización del modelo de desarrollo; el preludio neoliberal.

El gobierno de Hugo Bánzer (1971-1979) significó una ruptura respecto de los gobiernos militares anteriores, definida en la participación política de los “nuevos actores” surgidos en las últimas dos décadas. Hacia los inicios de su administración, “el país enfrentaba una nueva realidad: la reconstitución de grupos empresariales vinculados fuertemente con intereses privados extranjeros”⁶⁸, nueva clase dominante surgida de las políticas desarrollistas seguidas con posterioridad a la Revolución del ’52, representada en el empresariado agroindustrial, la minería mediana, la banca extranjera y el sector comercial (importador-exportador). Estos actores emergentes se integraron políticamente como apoyos civiles del régimen dictatorial⁶⁹,

⁶⁸ Fernández Terán, Roberto. *FMI, Banco Mundial y Estado neocolonial. Poder supranacional en Bolivia*. La Paz: Plural Editores, 2004. 64 p.

⁶⁹ Bánzer fue acompañado en sus primeros años por una coalición civil que incluyó la participación del MNR de Paz Estenssoro, la Falange Socialista Boliviana (FSB), partido de orientación fascista y, fundamentalmente la Corporación de Empresarios Privados de Bolivia (CPEB), que durante su gobierno adquirió una gran ascendencia económica y política.

desde donde impulsaron la profundización del modelo económico descrito brevemente en las páginas anteriores. Como parte de esta alianza militar-empresarial, el gobierno de Bánzer fortaleció la apertura al capital internacional, en tanto el auge petrolero permitió una mayor transferencia de recursos al oriente. “Parecía como si el poder nacional se hubiera desplazado de La Paz a Santa Cruz”⁷⁰.

En relación a la organización de la minería, este período se caracterizó por un fortalecimiento del sector privado mediano, fuertemente capitalizado y ligado a grandes intereses internacionales, consecuencia directa de la política de apertura al capital internacional y la profundización de las transferencias desde la empresa pública, las cuales atentaron contra su monopolio económico y competitividad. En tal sentido, este período no fue sino el preludeo del retiro del Estado de la actividad minera, concretado en 1985 bajo la política de reestructuración económica, lo que nos muestra que algo estaba comenzando a cambiar en la distribución del poder político en el ‘sistema nacional’.

Como parte de un compromiso oficial asumido con el FMI⁷¹, en 1972 el gobierno devaluó el peso boliviano en un 68%, en tanto en 1974 retiró o redujo los subsidios estatales a una amplia variedad de servicios y productos de primera necesidad (harina, aceite, huevos, azúcar, café, carne, arroz, etc.). La elevación de precios al consumidor afectó severamente al conjunto de los sectores populares. Durante este período, el trabajo enfrentó una suba constante del costo de vida como consecuencia del congelamiento de salarios, la remoción de subsidios estatales y la devaluación monetaria, lo cual se reflejó en una reducción de la cuota de participación del sector asalariado en el ingreso nacional, de un 47% al 31%.

Las medidas económicas de la administración de Bánzer deterioraron profundamente la economía tradicional del altiplano. Como consecuencia de la devaluación monetaria, el productor campesino enfrentó una suba exorbitante en los productos de su consumo, al tiempo que se lo privó de acceder a formas de compensación económica por parte del Estado.⁷² La respuesta social no se hizo esperar y pronto, la movilización campesina desbordó sus anquilosadas estructuras sindicales de control y ocupó el centro de la escena nacional, a través del bloqueo de carreteras, concentrado en los poblados de Tocata y Epizana, en el

⁷⁰ Dunkerley, James. 2003, *op. cit.* p. 275

⁷¹ Para detalles acerca del Programa comprometido con el FMI, Ver: Fernández Terán. 2004, *op. cit.* p. 58

⁷² Los sectores asalariados urbanos sí recibieron un bono compensatorio, aún cuando este no cubrió el total de la suba en el costo de vida. Dunkerley, James. 2003, *op. cit.* p. 261

departamento de Cochabamba. La violenta represión ejercida por el gobierno logró detener la movilización, así como también destruyó el ya debilitado pacto militar-campesino, el cual, a diez años de su creación, ya no servía al gobierno como herramienta política fundamental.

Aún cuando el gobierno de Banzer ofreció estabilidad política y generosas condiciones a la inversión extranjera, ésta fue más bien limitada, lo que se reflejó en una progresiva transnacionalización de sectores económicos estratégicos ligados a la economía de enclave sin mayores eslabonamientos con el resto de la economía. La promesa inicial de “crecimiento acelerado” pronunciada por el gobierno terminó financiándose con un incremento desorbitante del endeudamiento externo. Entre 1971 y 1978, la deuda externa de Bolivia aumentó en 2.139 millones de dólares, llegando a los 3.1001 millones. Muchos de estos préstamos fueron adquiridos en la banca privada internacional⁷³, la cual fijó altas tasas de interés altísimas. Tres años después de que Banzer abandonará el poder, América Latina vivió el cimbronazo de la crisis de la deuda, adentrándose en el caos económico. En Bolivia, el peso de la deuda externa se convirtió en una carga agobiante para una economía pública con capitales escasos y recursos más bien limitados.

Así, aún cuando durante estas décadas la economía boliviana demostró tasas moderadas. “En términos tanto de la forma en que fue generado como de sus consecuencias, tal crecimiento evidentemente no fue cosustancialmente acompañado por un auténtico desarrollo. Empero, sí proporcionó una apariencia de modernización.”⁷⁴

En 1978, ocho años antes del inicio del ciclo de reformas neoliberales, el antropólogo Xavier Albó sentenció acertadamente que “si empiezan a estimularse las grandes empresas agrícolas mecanizadas o semi-mecanizadas, como ya está sucediendo en el Oriente, pero no se desarrolla al mismo tiempo el sector industrializado de las ciudades ni se aumenta la producción del pequeño agricultor, como también está sucediendo (o dejando de suceder), en materia de años podríamos llegar a un punto muy semejante al punto de partida anterior a la Reforma Agraria: unos pocos poseerán la mayor parte de las tierras y una gran mayoría

73 “Entre 1975-1979, los bancos corporativos como el CITICORP, el Bank of America y el Dresdner Bank participaban con más del 60% del monto total del crédito dentro de los consorcios.” En Fernández Terán, 2004, *op. cit.* p. 61

⁷⁴ Dunerley, James. 2003, *op. cit.*

poseerá sólo unas pequeñas parcelas improductivas o simplemente serán campesinos sin tierras, dispuestos a regalar su fuerza de trabajo al primer postor⁷⁵.

En sus palabras Albó enumeró brevemente los resultados sobresalientes del modelo económico aplicado en Bolivia a partir de 1956. Estos han sido expuestos en el presente capítulo y pueden resumirse en tres procesos relacionados entre sí. En primer lugar, en este período Bolivia asistió una importante expansión de la empresa agrícola, limitada geográficamente al espacio oriental, concentrada en pocas manos, fuertemente capitalizada y con escasos requerimientos de trabajo permanente. En segundo lugar, el desarrollo del oriente se correspondió con el más absoluto estancamiento del resto de la estructura económica, tanto urbana como rural, la cual cumplió un rol subsidiario y no se expandió más allá de la economía minera de enclave y la agricultura altiplánica de subsistencia. En tercer lugar, el desarrollo capitalista limitado únicamente al espacio oriental y reflejado en el estancamiento económico del altiplano, tuvo en éste último severas consecuencias ecológicas y demográficas. La escasez de tierras, la extensión del minifundio improductivo y la pobreza creciente, convirtieron al altiplano en un expulsor de su excedente poblacional. Este se orientó masivamente hacia otras áreas rurales, valles templados, Yungas o zonas de colonización, así como también hacia las áreas urbanas, principalmente a la ciudad de La Paz.

Si los cambios en el nivel de la estructura económica anteriormente expresados obligaron al poblador altiplánico a migrar, también definieron el *carácter* de su integración económica y social en su lugar de destino. De hecho, por la forma en la que la economía boliviana se estructuró en las últimas décadas, la migración desde la estructura rural tradicional del altiplano, no condujo hacia formas capitalistas-individuales de trabajo asalariado, ni en el espacio rural ni en el urbano. Como veremos en el siguiente capítulo, ya fuese en las zonas orientales de colonización o en las periferias de los grandes centros urbanos, los pobladores del altiplano no sufrieron un proceso de *descampesinización*, o proletarización asalariada, sino que reprodujeron sus estructuras campesinas al incorporarse a economías extremadamente precarias, donde prevaleció el oficio traído del campo, con bajos requerimientos de capital, en unidades económicas del tipo familiar, y bajo condiciones de marginalidad creciente que impulsaron la actualización de aquellas formas y prácticas de trabajo asociado y organización comunitaria, propias de las comunidades de origen. Así, como veremos en el siguiente

75 Albó, Xavier. *¿Bodas de Plata? o Requiem por una Reforma Agraria*. La Paz: Centro de Investigación y promoción del campesinado (CIPCA), 1979. p. 39

capítulo, las migraciones del altiplano, dieron origen a una *nueva ruralidad* y *nueva urbanidad*, fundamentalmente agrarias, en sus lógicas económica y social.

IV Neoliberalismo: expansión de la lógica agraria tradicional y surgimiento de nuevos actores sociales

En este, nuestro último capítulo, explicaremos en qué forma las reformas estructurales aplicadas en Bolivia a partir de 1985, consolidaron el proceso de desarrollo económico limitado y la dualidad del Estado boliviano. Veremos también cómo, enmarcado en los procesos históricos descritos en los capítulos anteriores, el neoliberalismo, así como habilitó la convergencia del poder político y económico en el nivel nacional, impulsó la expansión geográfica y demográfica de la sociedad agraria tradicional, cuyas estructuras y lógicas, readaptadas y reactualizadas, permitieron la rearticulación de las fuerzas sociales bolivianas y la emergencia de nuevos actores sociales, tanto urbanos como rurales, fundamentalmente El Alto y el Chapare.

i Crisis y reestructuración económica

A partir de la caída del gobierno de Banzer en 1978, Bolivia quedó inmersa en un caos político, reflejo de la reapertura de la lucha por la hegemonía política⁷⁶. Finalmente, en un contexto de gran activación popular, liderada por la ya “histórica” COB, la democracia política fue recuperada y el primer gobierno de transición quedó constituido por la Unión Democrática y Popular (UDP), coalición de centro-izquierda⁷⁷, encabezada por Hernán Siles Suazo. Sin embargo, el gobierno de la UDP “enfrentó la acumulación de 18 años de demandas reprimidas, endeudamiento crítico heredado del ‘banzerato’, sequías desastrosas en el altiplano (1983), y caídas dramáticas en los precios de materias primas, en especial del estaño.”⁷⁸ En condiciones similares a las del resto de la región, el mayor desafío del gobierno de la UDP provino del *shock* externo que supuso la *crisis de la deuda*, la cual tuvo un impacto particularmente profundo en Bolivia, un país donde, hacia 1984, la deuda externa ascendía a más de 3.500 millones de dólares, cuatro veces el ingreso de sus exportaciones para el mismo

⁷⁶ Entre 1978 y 1982, Bolivia vivió tres procesos electorales, seis golpes de Estado, nueve presidentes y tres transiciones negociadas.

⁷⁷ Sus fuerzas más importantes eran el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), al cual pertenecía al presidente; el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB).

⁷⁸ Kruse, Tomhas. “Transición política y recomposición sindical. Reflexiones desde Bolivia”. *Los sindicatos frente a los procesos de transición política*. La Paz: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2001. p. 159.

año.⁷⁹ Pronto, el gobierno de Siles Suazo naufragó en el caos político y social. “Los obstáculos a la gobernabilidad surgieron tanto en el seno mismo de la UDP y en los sindicatos, como de la oposición de los partidos de derecha y de los gremios de empresarios.”⁸⁰

En 1984-85 la inflación trepó un 26.000%⁸¹, definiendo un ritmo vertiginoso de desintegración económica, política y social. A propuesta de la oposición congresal, Siles Suazo acortó un año su mandato y convocó a elecciones presidenciales. Así fue como, en 1985, el MNR volvió al poder conducido por su líder histórico, Paz Estenssoro. El nuevo gabinete demostró una presencia importante por parte del empresariado nacional, que pasó a ocupar la mayoría de los puestos claves del Estado. Junto a éstos, también ingresaron a la administración un numeroso conjunto de tecnócratas, la mayoría con posiciones políticas independientes. Bajo esta nueva coalición y con la izquierda totalmente desarticulada, Paz Estenssoro tuvo vía libre para aplicar su *Nueva Política Económica* (NPE), el programa de estabilización ortodoxa más profundo de América Latina. El paquete de medidas, contenido en el Decreto 21060, incluyó la reducción del déficit fiscal, el congelamiento de salarios, la devaluación de la moneda, la flexibilización laboral y el recorte del empleo público. Más importante aún, el programa también contempló la aplicación de importantes medidas de reestructuración económica que iban más allá de los meros objetivos de estabilización económica, y que se orientaron hacia la restauración de la autoridad política. En palabras de su creador, Sánchez de Lozada, “más que un programa estrictamente económico, la NPE es un plan político que tiende al restablecimiento de los principios fundamentales para el funcionamiento de la República, en ausencia de los cuales se corre el grave riesgo de precipitarse en el camino de la desintegración del Estado nacional”⁸².

Traducida a los hechos, la NPE se orientó a consolidar la nueva estructura de poder nacional formada a partir de 1956, representada por los intereses del empresariado oriental y el capital financiero, lo cual se tradujo en la destrucción definitiva de la COB y del poder obrero, base del movimiento popular boliviano. Esta quedó determinada en el ataque frontal a

⁷⁹ CIEDLA. 1991, *op. cit.* p. 37.

⁸⁰ Morales, Juan Antonio. *Política Económica en Bolivia después de la transición*. Celedón, Carmen, et. al. *La política económica en la transición a la democracia*. Santiago: Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), 1993. p. 101

⁸¹ Gamarra, Eduardo A. “Crafting Political Support for Stabilization: Political Pacts and New Economic Policy in Bolivia.” *Democracy, Markets, and Structural Reform in Latin America*. Gamarra, Eduardo A., et al. Miami: North-South Center, University of Miami, 1993. p. 105.

⁸² En: Morales, Juan Antonio. “Nueva Política Económica y modernización del Estado”. Mayorga, Antonio René (Coord.). 1992, *op. cit.* p. 101

su núcleo minero, con el cierre de la mayoría de las minas del Estado y el despido de 22.628 del total de 30.174 empleados de la COMIBOL⁸³. Los despidos masivos, eufemísticamente llamados “relocalizaciones”, también se extendieron a la administración pública, los bancos y las fábricas. En tanto, el proceso de reestructuración fue asegurado a través de la instauración de una *democracia musculosa*⁸⁴, sustentada en la utilización rutinaria del Estado de Sitio⁸⁵, herramienta que resultó más que efectiva frente a una sociedad en camino hacia su desarticulación.

Tanto en su propuesta económica como política, la NPE tuvo como efecto sobresaliente la consolidación de una situación de correspondencia entre el poder económico y político en el *sistema nacional*. A través de la aplicación de las reformas neoliberales, aquellos grupos dominantes surgidos con posterioridad a la revolución nacionalista lograron la desarticulación del campo popular-nacional, condición necesaria para la consolidación de la nueva estructura de poder, la cual a su vez fue protegida de fisuras internas con la creación de un innovador sistema de *democracia de pactos* y cuoteo del Estado. En tal sentido, “no puede entenderse la naturaleza, menos aún la orientación de la reforma neoliberal del Estado y la economía, iniciada en 1985 y profundizada en los 90, al margen de la estrecha vinculación entre los empresarios, los consorcios multinacionales, las ‘agencias de cooperación’ y una renovada generación de funcionarios estatales dirigida por militantes del MNR y de ADN.”⁸⁶

La desarticulación de la economía estatal tuvo consecuencias importantes en términos del empleo. En relación a este, el ajuste estructural actuó, como hemos visto, en forma directa a través del cierre de las minas del Estado y la reducción del empleo público, así como también indirectamente, en la apertura de la economía (por reducción de aranceles y de restricciones a la importación), con la quiebra de numerosas unidades industriales no competitivas. En los primeros años de la aplicación de las reformas neoliberales, estos procesos se manifestaron en un desempleo abierto que se ubicó entre el 20% y 25% de la PEA, incremento de más del 100% respecto a principios de los ‘80. Con las relocalizaciones y el cierre de las empresas públicas, la responsabilidad por la generación de nuevos empleos y

⁸³ Toranzo Roca, Carlos F.; Arrieta Abdalla, Mario. *Nueva derecha y desproletarización en Bolivia*. La Paz: ILDIS, 1989. p. 129

⁸⁴ *Ibid*, p. 101

⁸⁵ A lo largo del ciclo democrático, los brotes de contestación social fueron respondidos desde los sucesivos gobiernos con la declaración del Estado de Sitio. Estos ascendieron a 6 en total, incluyendo el Estado de Sitio del año 2000, el cual fue abiertamente desafiado por la población.

⁸⁶ Orellana Aillón, Lorgio. 2006, *op. cit.* p. 5

bienestar social fueron transferidas, como veremos más adelante, desde la economía “nacional” hacia el sector informal urbano y la economía de la coca.

Así como la NPE resultó en la desfiguración del sector asalariado urbano, sus efectos en el *sistema local* rural, no fueron menos calamitosos. Ya hemos visto en el capítulo anterior cuáles eran hacia el principio de los ‘80 las principales características de la economía campesina: baja productividad e ingresos, extensión del minifundio improductivo, pobreza y migración como consecuencia del desborde demográfico. Fundamentalmente, la nueva política neoliberal determinó la *crisis* profunda de la economía campesina. El efecto más devastador sobre la producción campesina se relacionó a la nueva política de apertura comercial, la cual constituyó uno de los ejes del Decreto 21060. El incentivo a la importación competitiva y sustitutiva de la producción campesina, repercutió negativamente en los ya reducidos ingresos del productor del altiplano. En 1995, luego de diez años de economía abierta, el valor bruto de la producción campesina correspondía al 44% de aquel de 1985.⁸⁷ El intento de los productores de compensar la caída en sus ingresos a través del aumento de la producción no hizo sino empeorar las condiciones de los suelos y reducir aún más su productividad. Hasta 1985, como hemos visto, el campesino del altiplano había sufrido las consecuencias negativas de su integración subordinada a la economía nacional en su rol de transferidor de recursos (alimentos y mano de obra baratos), bajo términos de intercambio crecientemente desiguales, y marginado por las políticas estatales de crédito y desarrollo agrario. A partir de 1985, como consecuencia del inicio de la economía neoliberal, sus posibilidades de supervivencia económica quedaron definitivamente reducidas, determinada su irrelevancia y absoluta marginación como actor económico y social, en tanto en la nueva economía neoliberal, el campesino “no es productor ni consumidor (...) no es proveedor de mano de obra barata para la industria porque ésta no existe, no hay producción, no hay generación de fuentes de empleo...”⁸⁸.

Los procesos económicos desarrollados en los párrafos anteriores, inauguraron un proceso de *migraciones masivas* definitivas que alteraron radicalmente la estructura económica y social boliviana. Respecto de este fenómeno, es posible afirmar que “existe una

⁸⁷ Escobar de Pabón, Silvia. “Ajuste y liberalización, las causas del conflicto social.” En: Coyuntura (CEDLA). La Paz, Octubre 2003.

⁸⁸ Arrieta, Mario. “Proceso de descampesinización y redefinición del campesino”. En: Eróstegui T., Rodolfo. *El movimiento sindical hacia el año 2000*. La Paz: ILDIS, 1990. p. 206.

migración antes y otra después del 21060”⁸⁹, esta última, definida en la profundización de la crisis de la economía campesina tradicional y la desestructuración de la economía pública. Desde 1985 hasta hoy, Bolivia presentó tasas de migración interna que ascienden a los 100.000 habitantes por año. Dentro de estos flujos migratorios internos, los departamentos del altiplano, en los cuales se concentraba no sólo la economía campesina tradicional sino además los más importantes centros mineros, se consolidaron como expulsores permanentes de sus poblaciones, presentando aún en 2001, tasas de migración neta negativas del 25,8%, 37,59% y 17,63%, para los departamentos de Potosí, Oruro y Chuquisaca⁹⁰ (*ver mapa*), respectivamente. El vaciamiento de los departamentos del altiplano⁹¹ se correspondió en un crecimiento desmesurado de las áreas urbanas, principalmente en el eje Cochabamba-La Paz-Santa Cruz, al tiempo que impulsó la extensión de la frontera agrícola hacia las zonas tropicales de cultivo de coca.⁹²

Como hemos visto, las causas de estas migraciones masivas, se encuentran en la crisis de la economía campesina tradicional y la desestructuración de la economía estatal minera, consecuencias directas de la aplicación de reformas económicas de corte neoliberal. Ahora bien, la propuesta neoliberal de modernización económica, no se ha presentado en Bolivia como un proceso expansivo que “coloque en crisis a las sociedades tradicionales ante la amenaza de su lenta disolución por nuevas y expansivas relaciones sociales modernizantes (economía de mercado, asalariamiento, movilidad social ascendente)”⁹³. Más bien, como ya hemos visto, el neoliberalismo consolidó un proceso de desarrollo capitalista limitado territorial y sectorialmente que, aún cuando llevó al deterioro de las condiciones de reproducción de las economías tradicionales, lo hizo “sin la fuerza de la sustitución histórica.”⁹⁴ Por esto sostenemos que, en Bolivia, ante la ausencia de una alternativa económica viable, las migraciones desde el altiplano llevaron conjuntamente a la expansión demográfica y geográfica de la *lógica agraria tradicional*, definida en una economía de unidades familiares de subsistencia, las cuales gestionan el espacio territorial en forma colectiva y horizontal, bajo estructuras y mecanismos similares a los de la comunidad agraria

⁸⁹ Vacaflores, Victor. “Migración interna e intraregional en Bolivia. Una de las caras del neoliberalismo.” En: Revista de Aportes Andinos. Quito, Octubre 2003, N° 7. p. 2

⁹⁰ Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Bolivia. Censo 2001.

⁹¹ Desde un punto de vista municipal, de 314 municipios, 217 son expulsores (69%) y 97 son receptores (31%).

⁹² Además, actualmente y como consecuencia de este proceso de migraciones masivas, entre un 30% y un 35% de la población boliviana ha migrado hacia el exterior (dos millones en Argentina y un millón y medio en los Estados Unidos). Vacaflores, Victor. 2003, *op. cit.*

⁹³ García Linera, *et. al.* *No somos juguete de nadie...* . La Paz: Plural, 2006. p. 19

⁹⁴ *Ibid.*,

tradicional, reactualizados y adaptados a los nuevos espacios, urbanos y rurales. Estos migrantes, “en la medida en que son marginados por el sistema, más fácilmente recurren a su propia tradición en busca de formas alternativas de sobrevivencia. Es el efecto boomerang de un desarrollo excluyente.”⁹⁵

De esta forma, el espacio rural tradicional no sólo no desaparece sino que además se extiende más allá de sus fronteras tradicionales. Continúa existiendo en las comunidades que aún existen precariamente en el altiplano⁹⁶, al tiempo que se reproduce por fuera de este, reactualizándose en la frontera agraria expandida, así como también en el espacio urbano. La comunidad del altiplano se reproduce en el sindicato cocalero y en la junta vecinal, como unidad de organización social autónoma, al tiempo que se enriquece en estas experiencias particulares de construcción colectiva e identitaria bajo condiciones marginales de integración a las nuevas realidades espaciales.

En la naturaleza territorial de las nuevas formas de organización social autónoma, encontramos similar *cancelación* del Estado y de la institucionalidad formal, a aquella anteriormente señalada para el caso de la comunidad y sindicato agrario en la post. revolución. Al igual que en estos últimos, en las juntas de vecinos y los sindicatos cocaleros, las nociones de democracia, autoridad y legitimidad, quedaron crecientemente asociadas a aquellas formas horizontales de articulación social ejercidas colectivamente en el espacio local, definidas en la autorrepresentación por mecanismos de participación directa y no intermediada, la toma de decisiones por consenso, la designación de autoridades locales revocables y las prácticas de solidaridad mutua. En tal sentido, puede decirse que la democracia se convirtió en una noción *territorial*,⁹⁷ crecientemente opuesta a aquella de democracia representativa, preconizada desde el Estado y monopolizada por las estructuras partidarias. Así fue que, en la autonomía local, se alojó el germen para la negación y cancelación efectiva del Estado, aquella que hemos descrito en nuestra introducción como una de las características sobresalientes del ciclo de movilización social en Bolivia.

⁹⁵ Albó, Xavier. “Etnias y pueblos originarios”. Bolivia en el Siglo XX. *La formación de la Bolivia Contemporánea*. Comp. Prudencio Campero, Fernando. La Paz: Harvard Club de Bolivia, 1999. p. 480

⁹⁶ Según el Censo del 2001, de un total de 8.274.325 habitantes de Bolivia, 3.109.095 continúan viviendo en el espacio rural, 1.737.406 específicamente en los departamentos altiplánicos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

⁹⁷ García Linera, Álvaro. *Rebelión en las venas*. La Paz: Comuna, 2001

Fundamentalmente, estas estructuras ofrecieron una alternativa viable de supervivencia económica e integración social, no sólo al actor campesino sino también al minero y el obrero relocalizado, los cuales, al tiempo que rescataron sus raíces comunitarias, aportaron sus propias memorias de organización y lucha proletaria.⁹⁸ Sobre estas nuevas estructuras autoorganizadas, progresó el proceso de rearticulación de los nuevos sujetos sociales y políticos bolivianos, de carácter disperso y fragmentario, con una identidad de autonomía y resistencia frente al Estado y con fuerte capacidad de control social y territorial. “Hay una sociedad muy organizada y ese dato es decisivo para entender la eficacia de la movilización social.”⁹⁹

A continuación veremos como los procesos anteriormente descriptos confluyeron particularmente en El Alto y el Chapare, consolidándolos como nuevos sujetos sociales y políticos, protagonistas directos del ciclo de protestas boliviano.

ii “Nueva urbanidad”: de campesinos y obreros a ‘vecinos informales’. El caso de El Alto.

El proceso de urbanización acelerada, iniciado ya en los ’70 y profundizado en las dos décadas siguientes, tuvo consecuencias más que significativas sobre la estructura social boliviana, entre ellas, la urbanización de la mayoría de la población. Entre 1976 y 2001, la relación entre población urbana y población rural pasó de ser de 41%-59% a 62%-38%. Aún cuando algunos, hayan encontrado en esta alteración radical de la distribución poblacional un signo positivo de aquella modernización social impulsada por el proyecto neoliberal¹⁰⁰, lo cierto es que, como ya hemos visto, la *nueva urbanidad* boliviana se desarrolló como consecuencia de la falta de tal proceso modernizador, sino de su retroceso. El modelo de desarrollo económico seguido por Bolivia a partir de 1956 generó una estructura económica “nacional” moderna de carácter concentrado y limitado a la agroindustria oriental y el enclave minero-energético, altamente capitalizada y orientada hacia el mercado externo; sin capacidad de absorción laboral ni producción para el mercado interno. Asimismo, este progreso avanzó a través en la crisis de la economía rural del altiplano y la desarticulación de la economía

⁹⁸ Cajías de la Vega, Magdalena. “El poder de la memoria: los mineros en las jornadas de octubre de 2003.” Robins, Nicholas A. *Conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia*. La Paz: Plural, 2006. p. 39.

⁹⁹ Entrevista del autor con el Sr. José Antonio Quiroga, analista independiente y director de la Editorial Plural.

estatal, completada a partir del inicio del ciclo neoliberal, proceso que hemos desarrollado en los párrafos anteriores.

En tal sentido, para el migrante campesino y minero, la “ciudad” no se constituyó en una alternativa económica modernizante, sino que, como hemos mencionado anteriormente, se correspondió con la extensión de la *lógica tradicional agraria*, por la cual, aquella estructura económica propia del sistema local-rural, se transfiguró en un extenso sector urbano *informal*, caracterizado fundamentalmente en la continuidad de formas de trabajo asociado, bajo unidades económicas fragmentarias del tipo familiar, con escasos requerimientos de capital y un alto componente en trabajo y, con niveles de producción de subsistencia. Así es que “la migración urbana-rural tendió a configurar amplios sectores de nueva población urbana dedicada a actividades terciarias o de naturaleza informal, cuyos niveles de productividad no son muy superiores a los del sector agrícola que han abandonado recientemente.”¹⁰¹ Hacia 1997, este sector informal-familiar generaba 8 de cada 10 puestos de trabajo¹⁰², abarcando al 65% de la población ocupada (2.333.890 millones de personas), distribuidos en aproximadamente 500.000 unidades de tipo familiar y semi-empresarial.

Más importante aún, la *continuidad* campo-ciudad se manifestó particularmente en las formas asociativas y solidarias propias de las comunidades rurales de origen que los nuevos habitantes redefinieron como forma de enfrentar las condiciones *marginales* de su integración al nuevo espacio urbano, determinadas en la precariedad de sus condiciones de vida y la ausencia servicios básicos e infraestructura social¹⁰³. En tal sentido, los campesinos y mineros migrantes, ahora devenidos en *informales*, se vieron frente al desafío de construir sus *espacios públicos* en un contexto de total abandono por parte del Estado y del mercado. En consecuencia, la expansión de la lógica agraria tradicional se manifestó en la ciudad como un proceso de autoorganización social, encarado por sus nuevos habitantes como respuesta colectiva al desafío de resolver sus necesidades básicas, y que derivó en la conformación de estructuras autónomas de integración social.

El caso particular de la ciudad de El Alto, ha sido paradigmático en relación a los procesos referidos anteriormente. Nacida de la migración campesina y minera proveniente del altiplano, El Alto se constituyó tempranamente como una de las ciudades más pobres e

¹⁰⁰ Mesa, Carlos. “Bolivia. Frente a un nuevo Estado.” En: Nueva Sociedad, Mayo-Junio 1997. p. 6

¹⁰¹ *Ibid.* p.25

¹⁰² Kruse, Thomas. 2001, *op. cit.* p. 165.

¹⁰³ Escobar de Pabón. 2005, *op. cit.*

informales de Bolivia al tiempo que, bajo estas condiciones de precariedad sociolaboral extremas desarrolló una fuerte identidad urbana propia y autónoma, definida en profundos sentimientos de pertenencia territorial y barrial, “producto de una construcción esforzada de un grupo de hombres y mujeres que han tejido complejas relaciones interfamiliares, regionales, colectivas, de trabajo y organizativas definidas además por las carencias de servicios sociales: sanitarios, educativos, y de seguridad.”¹⁰⁴

En sus orígenes, El Alto fue una zona rural aledaña a la ciudad de La Paz, constituyéndose en centro urbano a partir de la década del '50. Su ubicación territorial es el puente entre los territorios rurales del altiplano y la ciudad capital, por lo que el desarrollo de El Alto estuvo particularmente ligado a los procesos económicos y sociales de las comunidades campesinas, con las cuales mantiene estrechos vínculos. En tal sentido, El Alto vivió un proceso de expansión acelerada con anterioridad a la aplicación de las reformas neoliberales, relacionado con los procesos de empobrecimiento y migraciones rurales propios del altiplano ya en las décadas de los '60 y '70. El proceso expansivo fue extendido y profundizado por aquellas migraciones surgidas con posterioridad a la aplicación de la NPE. Así, entre 1976 y 1992, la ciudad crece a un ritmo anual de 9,43%, tasa que durante el resto de la década se mantiene en un importante 5,3%¹⁰⁵. Solamente en los diez años transcurridos entre 1976 y 1988, la ciudad creció desde los 95.455 habitantes hasta los 307.403, en tanto hacia el 2001, quince años después, superaba el doble de población con 700.000 habitantes¹⁰⁶ (aunque algunos arriesgan el millón), constituyéndose en la cuarta ciudad más poblada detrás de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Desde hace ya décadas, “El Alto es una ciudad en movimiento, tanto desde el punto de vista demográfico como político-social.”¹⁰⁷

La mayoría de los vecinos de El Alto, campesinos y mineros, llegaron al espacio urbano buscando garantizarse para sí mismos aquella propiedad familiar que el campo ya no podía brindar. Sin embargo, el acceso a la propiedad familiar no ha estado asociado a la superación de las condiciones de extrema precariedad y miseria propias del espacio rural, sino que más bien las ha reproducido en el espacio urbano. En el año 2001, un informe de el Instituto Nacional de Estadísticas determinó que el 93% de la población de El Alto vivía bajo

¹⁰⁴ Mamani Ramírez, Pablo. Microgobiernos Barriales. El Alto: Centro Andino de Estudios Estratégicos (CADE), 2005. p. 10

¹⁰⁵ *Ibid*, p. 249.

¹⁰⁶ Mamani Ramírez, Pablo. 2005, *op. cit.* p. 29

¹⁰⁷ García Linera, Álvaro; *et al.* 2006, *op. cit.* p. 249.

la línea de pobreza, cifra similar a aquel 90% existente el espacio rural.¹⁰⁸ En tanto, un 70% de la fuerza laboral se encuentra en el sector informal, en condiciones de empleo precario y bajo relaciones familiares o semiempresariales, en una ciudad donde se encuentran las tasas más elevadas de población económica entre hombres y mujeres, así como también el mayor índice de trabajo infantil y el promedio más alto de personas ocupadas por familia.¹⁰⁹

Con el crecimiento exponencial de su población, la ciudad también vio incrementarse dramáticamente el conjunto de necesidades básicas, desde las viviendas hasta los servicios públicos y la infraestructura social. En tal sentido, El Alto surgió y se desarrolló signada por importantes deficiencias sociales y dificultades cotidianas, en un contexto de casi absoluto abandono por parte del Estado, “que la consideraba y en parte la sigue considerando como un pueblo rural.”¹¹⁰ Como consecuencia, el surgimiento y construcción de los “barrios” alteños, estuvo fuertemente relacionado con un proceso por el cual sus nuevos habitantes, en su mayoría migrantes rurales, readaptaron y urbanizaron el conjunto de prácticas asociativas propias de sus comunidades y sindicatos agrarios de origen¹¹¹. Desde estas relaciones asociativas, los vecinos de El Alto han construido sus casas, así como también muchos de sus espacios “públicos”: calles, plazas, canchas, cloacas, escuelas, etc. Este desarrollo barrial estuvo condicionado a lógicas y prácticas solidarias propias de las comunidades, como los sistemas de ayuda mutua y reciprocidad (*ayni*) o la obligación de ofrecer mano de obra o dinero, y la rotación de tareas, estas últimas relacionadas al control de la participación y la recaudación de fondos. Se puede concluir que, “sin lugar a dudas, El Alto es parte de una construcción esforzada de sus habitantes.”¹¹²

Estas acciones colectivas produjeron fuertes lazos hacia el interior de los barrios, los cuales han ido definiendo formas de autoorganización social, plasmadas en las “juntas vecinales”.¹¹³ Surgidas tempranamente, estas juntas vecinales retomaron las formas de participación propias del espacio rural andino, constituyéndose en organizaciones de carácter *territorial* sobre la base de la propiedad familiar. En la junta vecinal, tal y como se da en la comunidad agraria, cada unidad familiar adquiere, junto con su propiedad, todo un conjunto

¹⁰⁸ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INE). Censo 2001

¹⁰⁹ Escobar de Pabón, Silvia. 2003, *op. cit.* p. 54

¹¹⁰ García Linera, Álvaro; *et al.* 2005, *op. cit.* 251 p.

¹¹¹ Entrevista del autor con la Sra. Loreta Tellería, Politóloga y Directora del “Observatorio de Democracia y Seguridad (OdyS)”.

¹¹² Mamani Ramírez, Pablo. 2005, *op. cit.* p. 28.

¹¹³ Además, El Alto es una ciudad plagada de organizaciones asociativas: centros de fomento, asociaciones barriales, clubes, etc.

de derechos y obligaciones, entre ellas, la de participar activamente, aportando un delegado a la asamblea vecinal. La norma es que sea rotativo y que todos participen.¹¹⁴

Como organizaciones territoriales de base, las juntas vecinales, se han ido constituyendo bajo una doble funcionalidad: como estructuras de autogobierno barrial y como instancias de representación y presión frente a la institucionalidad estatal. Como estructuras de autogobierno, las juntas vecinales tomaron y reprodujeron las prácticas comunitario-agrarias de deliberación y consenso mayoritario, sobre la base de la participación obligatoria y la rotación de trabajo. La obligatoriedad en la participación supone la sujeción a formas aceptadas de coerción por lo cual el vecino queda obligado a actuar conforme lo decidido en mayoría, bajo pena de recibir sanciones en caso de incumplimiento. La obligación de participar se extiende a todas las decisiones colectivas, e incluye las marchas, los bloqueos y otras acciones de protesta, de forma que este mecanismo se convierte en un instrumento más que efectivo para la movilización social efectiva y cohesionada. En cada estructura *territorial* vecinal convergen realidades socioeconómicas y orígenes diversos (obreros, ex obreros, mineros, campesinos), por lo que la *identidad barrial* se ha constituido en una fuerza aglutinadora de estas diferencias, y en referente genuino de su articulación territorial particular, aquella que además la diferencia del resto de las unidades vecinales. En tal sentido, la heterogeneidad propia del proceso discontinuo de formación barrial ha definido un carácter igualmente heterogéneo de sus juntas vecinales, de sus estructuras, sistemas de autoridad, derechos, tareas, etc. Asimismo, este hecho se encuentra relacionado con el “mestizaje” de prácticas asociativas diversas al que la integración local ha dado origen, definidas en “memorias” y formas de organización campesinas así como también obreras y mineras¹¹⁵, parte de un proceso de nueva articulación urbano-popular.

De la agregación de las juntas vecinales, en 1979 surgió la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE)¹¹⁶, la cual se instituyó como instancia de intermediación y

¹¹⁴ Entrevista realizada por el autor al Sr. Antonio Peredo, Senador titular del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)

¹¹⁵ En este sentido, con posterioridad a la aplicación de la NPE, “las organizaciones sociales y sindicales se fortalecieron con la llegada de los mineros”, los cuales aportaron una identidad fuertemente politizada y una memoria de lucha y resistencia frente al Estado. Cajías de la Vega, Magdalena. “El poder de la memoria: los mineros en las jornadas de octubre de 2003.” Robins, Nicholas A. *Conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia*. La Paz: Plural, 2006. p. 39.

¹¹⁶ Existe otra importante institución asociativa que es la Central Obrera Regional (COR), la cual agrupa a varios sectores laborales según su oficio. Esta ha participado conjuntamente en acciones de presión y movilización.

representación entre los barrios y el conjunto de las instituciones estatales.¹¹⁷ Originalmente surgida desde la articulación de las unidades de base, a lo largo de las décadas de los '80 y '90, esta estructura fue crecientemente penetrada por los partidos políticos, los cuales buscaron integrar a la estructura vecinal en la lógica electoral, a través del establecimiento de extensas redes clientelares, orientadas hacia cooptación de sus líderes y juntas vecinales. Aquellos dirigentes que se integraban a las estructuras clientelares lograban corresponder con mayor facilidad las demandas de sus poblaciones vecinales, lo que, al mismo tiempo, consolidaba su posición política, llegando muchas veces a ascender a cargos públicos municipales. Esta estructura clientelar fue reforzada y extendida gracias a la Ley de Participación Popular (1994), la cual estableció la descentralización política y administrativa de Bolivia, y supuso una importante transferencia de recursos a los niveles locales. Sin embargo, a partir de ese momento comienza a darse una reacción por parte de las estructuras de base, las cuales manifiestan su rechazo al intento estatal de injerir en el desarrollo local, “ampliando sus comportamientos autónomos y la preferencia por redes construidas distritalmente y de manera directa sin necesidad de intermediación de los niveles de dirección superior.”¹¹⁸ En este sentido, el reforzamiento de las estructuras vecinales de organización horizontal se ha asociado a la defensa de su *autonomía* cotidiana frente a las injerencias de un Estado, que históricamente ha sido periférico y cuyos intentos de control efectivos son crecientemente percibidos como una amenaza a la organización colectiva.

La reacción desde la *autonomía* por parte de las estructuras vecinales de base tendió y el fortalecimiento de aquellas formas horizontales de articulación barrial, las cuales se encuentran en la base de las formas efectivas de movilización social que constituyeron a la ciudad de El Alto en el epicentro de la “Guerra del Gas” en el año 2003. Respecto de estas formas de movilización, Pablo Mamani¹¹⁹ ha destacado la celeridad por la cual El Alto se volvió una ciudad inaccesible, totalmente bloqueada y controlada por un conjunto de “microgobiernos barriales”, representación hacia el interior de la unidad urbana del *colectivo fragmentado*, reproductor de estructuras de organización e integración social vinculadas al control efectivo de un territorio limitado al espacio local.

El Alto se constituyó en el espacio de confluencia del conjunto de aquellos procesos históricos que han sido desarrollados en la presente investigación, lo que determinó que, en 2003, la ciudad emergiera como centro de condensación del conjunto de los actores y

¹¹⁷ García Linera, Álvaro; *et al.* 2005, *op. cit.* 251 pp. 253-257

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 259

demandas sociales movilizadas, aquella que determina el curso de la lucha social, constituyéndose en “la ciudad que contiene a la Nación”¹²⁰

iii “Nueva ruralidad”: coca, supervivencia y movimiento cocalero. El Chapare.

La zona del Chapare es un área rural de desarrollo reciente. Al igual que en el caso de la ciudad de El Alto, su crecimiento acelerado se dio en íntima relación con el proceso de migraciones masivas, descrito anteriormente, importante ya hacia mediados de los '70 y profundizado a partir del año 1985, año en que comienza la aplicación de políticas neoliberales. Sin embargo, el desarrollo del Chapare, tanto económico como social, se ha ligado fundamentalmente al *boom* en la demanda de cocaína, a partir de los años '70, por parte de los países industrializados y manifestado en un crecimiento exponencial en los precios y cantidades de la producción de coca.

El desarrollo de la región comenzó tempranamente en la década del '20, ligado a procesos de colonización promocionados desde el Estado o llevados adelante espontáneamente. En las décadas siguientes, sus pobladores desarrollaron una economía limitadamente mercantil vinculada a la producción de hoja de coca, cultivo fácil de producir y transportar en un área de difícil acceso. La producción de coca generó el desarrollo de un campesino del tipo parcelario familiar, vinculado fundamentalmente al mercado, lo que en la mayoría de los casos significó de la desaparición de la *aynuqa* como estructura comunitaria de propiedad de la tierra. Sin embargo, las difíciles condiciones del proceso de asentamiento favorecieron la readaptación de las estructuras comunitarias¹²¹. Más allá de las promesas iniciales de crédito, asistencia técnica e infraestructura, el proceso de colonización avanzó en un contexto de completa ausencia estatal. En este contexto, al igual que en otras zonas de colonización, “el conjunto de necesidades especiales compartidas que acompañan al asentamiento en una nueva región, espacialmente al nivel de infraestructura”¹²² impulsaron el desarrollo de vínculos solidarios y la estructuración de organizaciones campesinas que siguieron el modelo de los sindicatos agrarios del altiplano.

¹¹⁹ Mamani Ramírez, Pablo. 2005, op. cit

¹²⁰ Prada Alcoreza, Raúl. *Largo Octubre*. La Paz: Plural, 2004. p. 38

¹²¹ Albó, Xavier. 1986, op. cit., p. 432

¹²² *Ibid.*

A principios de los años 50, las familias de colonizadores se agruparon en los primeros sindicatos campesinos como forma de regular el acceso a las tierras, la circulación de la fuerza de trabajo, y “construir mecanismos de autoridad para la gestión de la vida cotidiana, funciones que continúan hasta la actualidad.”¹²³ Como hemos visto en los casos de la comunidad tradicional, pero también en el espacio urbano de El Alto, la propiedad de la tierra asignada determina al propietario todo un conjunto de derechos y obligaciones en relación a la comunidad, entre ellos la obligatoriedad en la participación en las Asambleas y el cumplimiento de sus decisiones. De forma tal que, al igual que en los casos mencionados, *la comunidad* ejerce un fuerte control social de sus miembros, a través de los mecanismos de decisión mayoritaria y consenso, aplicados a todas las decisiones colectivas, desde la división de tareas cotidianas y construcción de infraestructura, hasta la participación en el bloqueo de caminos u otras medidas de fuerza. Además, el cultivo de la coca, en particular, presenta ciertos rasgos que favorecen las prácticas de trabajo asociado. Aún cuando la producción de coca se realiza en pequeñas parcelas individuales, en las etapas posteriores a la plantación, el cultivo de coca requiere del trabajo colectivo, incorporando no sólo a hombres y mujeres, sino también a niños. En tal sentido, “su proceso productivo y comercial no genera una gran diferenciación social sino, más bien favorece la estructuración de comunidades de pequeños productores que comparten el trabajo a través de la figura del *ayni* (intercambio de trabajo o bienes).”¹²⁴

En relación a lo anterior, en las áreas de colonización, al igual que en el altiplano, el sindicato agrario continuó cumpliendo una importante función ecológica-económica, relacionada al aseguramiento de las condiciones de reproducción de la unidad del tipo familiar, a través de mecanismos asociativos de carácter obligatorio. De hecho, una de las funciones fundamentales del sindicato agrario se relaciona con el control del mercado de tierras local, fundamentalmente a través de la regulación de la compra-venta de propiedades y asegurándose que el comprador se comprometa con sus deberes respecto de la comunidad.¹²⁵ Sobre este fundamento económico-ecológico, el sindicato agrario se desarrolló como estructura autónoma de autogobierno local, emulando a las estructuras rurales tradicionales.

En la década del '70, el *boom* en la demanda de cocaína por parte de los países industrializados generó una suba exponencial en los precios y la producción de coca local.

¹²³ Stefanoni, Pablo; Do Alto, Hervé. *Evo Morales de la coca al Palacio*. La Paz: Malatesta, 2006. p. 37.

¹²⁴ *Ibid.* p. 42

¹²⁵ *Ibid.* p. 38

Este auge de la coca se correspondió con la crisis de la agricultura tradicional del altiplano, a partir de mediados de los '70. "En 1984 se comprobó que el 62 por ciento de los colonos del Chaparé no tenían, o habían dejado de tener, acceso a la tierra en sus comunidades de origen, mientras que, por regla general, el 38 por ciento restante poseía parcelas de menos de 1 hectárea, superficie a todas luces insuficiente para asegurar la subsistencia de sus familias."¹²⁶ El poblamiento acelerado del Chapare se profundizó aún más a partir de la instauración de la NPE, siendo esta zona tropical el otro destino, además de El Alto, privilegiado por los mineros relocalizados. Así, entre 1976 y 1992 la población censada del Chapare se incrementó desde 32.836 a 108.276 habitantes¹²⁷ aunque, algunos sostienen que el incremento llegó a los 300.000 habitantes.¹²⁸

Para los nuevos migrantes, el cultivo de coca ofreció oportunidades económicas únicas, con ingresos superiores no sólo a los de otros productos de la tierra, sino también a la mayoría de las actividades no agrícolas¹²⁹. Además, el cultivo de la coca presenta ciertas ventajas frente a otros productos agrícolas. A diferencia de otros cultivos, la coca del Chapare permite cuatro cosechas anuales por un período de diez a quince años. Además, su cultivo presenta altos requerimientos de fuerza laboral y baja incorporación de capital, siendo una economía con gran capacidad de generación de empleos, con posibilidades de incorporación inmediata a su producción.

En términos de organización social, el desarrollo de la región en estos años estuvo marcado en forma decisiva por el inicio de los programas de erradicación de cultivos de coca, en el marco de la "guerra contra las drogas", impulsada por los Estados Unidos, desde mediados de los '80, bajo la administración Reagan. En un principio, los programas se orientaron hacia la erradicación por sustitución, a través del pago de una compensación al productor individual. Sin embargo, dichos programas incluyeron no sólo recursos financieros para en concepto de compensaciones, sino que, además, sustentaron el reforzamiento de la presencia militar en el área de producción, y la modernización del equipamiento y el entrenamiento táctico de las fuerzas militares¹³⁰. Los programas de erradicación compensada

¹²⁶ Labrouse, Alain. 1990, *op. cit.* p. 294

¹²⁷ García Linera, Álvaro; *et al.* 2005, *op. cit.* p. 44

¹²⁸ Albó, Xavier. 1999, *op. cit.* p. 476

¹²⁹ *Ibid.*, p. 298

¹³⁰ "El Gobierno del Presidente Siles Suazo fue el primero en firmar con el Gobierno de los Estados Unidos, en 1983, un acuerdo sobre el control de estupefacientes en virtud del cual se creó la Unidad Móvil de Patrullas Rurales (UMOPAR). Este cuerpo de policía, especializado en la lucha contra el narcotráfico y dotado y adiestrado por agentes de la DEA, disponía en 1990 de setecientos miembros

tuvieron una aplicación más bien territorialmente limitada y descoordinada, producto de una estrategia que privilegió la destrucción de los cocales, por sobre el desarrollo de economías agrícolas alternativas, negando así las causas profundas de la extensión de la producción de cocas, y limitando severamente cualquier posibilidad de solución efectiva. A lo largo de la década del '80, los fracasos en el desarrollo de alternativas económicas viables y la escalada en la militarización del Chapare estimularon una progresiva articulación entre los sindicatos cocaleros de la región.

A principios de la década, la región se encontraba organizada en seis federaciones de sindicatos cocaleros¹³¹, débilmente integradas en la Federación Especial del Trópico. Estas federaciones tenían una orientación ante todo local, en parte por la naturaleza territorial de sus unidades sindicales de base. A partir de 1987, el gobierno comienza a incorporar la cuestión de la erradicación de la coca en el sistema legal-penal vigente, con la elaboración de la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), la cual estableció el carácter ilegal de los cultivos del Chapare y el objetivo de su sustitución definitiva. La Ley 1008, diseñada sin la consulta ni participación de las estructuras campesinas de base, fue percibida por éstas como una seria amenaza a sus medios de subsistencia, visto además el evidente fracaso de alternativas económicas viables. En 1988, los sindicatos cocaleros llevaron adelante un bloqueo de caminos en oposición a la sanción de la nueva normativa, acción que concluyó en “una de las primeras masacres cocaleras”¹³², donde el Estado inicio una guerra no declarada¹³³ contra el movimiento cocalero. Entre 1987 y 2002, las intervenciones militares y policiales en el área del Chapare resultaron en la muerte de por lo menos 57 cocaleros, 500 heridos por armas de fuego y 4.000 detenidos sin debido proceso.¹³⁴

La represión creciente y la criminalización de las organizaciones sindicales cocaleras por parte del Estado, se constituyeron en el impulso externo que habilitó la articulación definitiva de las estructuras sindicales de la región, concluida en 1992 con la conformación de

distribuidos en las zonas más críticas del país, sobre todo en el Chapare.” Labrouse, Alain. 1990, *op. cit.* p. 299

¹³¹ Cada Federación está integrada por centrales y sub centrales, las cuales agrupan a los sindicatos locales.

¹³² Mamani Ramirez, Pablo. 2004, *op. cit.* p. 55

¹³³ Entrevista realizada por el autor a la Sra. Leonida Zurita, Senadora suplente del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Secretaria de Relaciones Internacionales y Directora Nacional del MAS-IPSP.

¹³⁴ García Linera, Álvaro; *et al.* 2005, *op. cit.* p. 75

la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba¹³⁵. Respuesta organizativa frente a la amenaza definida en la política estatal, la Coordinadora se conformo como “una estructura fuertemente cohesionada, tanto organizativa como ideológicamente”¹³⁶, instancia superadora de aquella tendencia a la atomización propia del ordenamiento local comunitario, y base *orgánica* del movimiento cocalero. En su enfrentamiento directo con el Estado, el movimiento definió un perfil crecientemente “nacional”. Sus acciones se definieron en importantes movilizaciones de carácter regional y nacional, bloqueos de caminos y ciertas formas de resistencia armada, como forma de rechazo a las políticas de erradicación de coca y con el objetivo de presionar al Estado y forzarlo a la negociación.

Sin embargo, en sus primeros años de existencia, el movimiento cocalero encontró que la movilización social que impulsaba, tenía un carácter limitado; era una “isla” de reacción popular, en una sociedad que había perdido recientemente sus grandes referentes sociales y donde el Estado actuaba en forma omnipotente. En el diagnóstico del movimiento cocalero, la “forma sindical” de organización y movilización se manifestó insuficiente para responder a los desafíos crecientes que se presentaban a las comunidades. Lo que el movimiento necesitaba era un “brazo político”¹³⁷ de la estructura sindical, que permitiera elevar el principio de autorrepresentación más allá de los niveles comunitarios. La idea básicamente era disputarle poder al Estado ya no solo desde la movilización social sino también desde el Estado mismo. El *Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos* (IPSP)¹³⁸, surgió como herramienta del movimiento cocalero, estructurada en torno a las organizaciones de base, y regida por sus normas y principios: el instrumento es expresión política de la organización sindical cocalera, su maquinaria electoral. El partido surge desde el movimiento social, como proceso de expansión desde el campo a la ciudad.¹³⁹

¹³⁵ Federación de Centrales Unidas Tiraque, Federación de Colonizadores de los Yungas del Chapare, Federación de Colonizadores de Chimore, Federación de Colonizadores Mamore, Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba.

¹³⁶ García Linera, Álvaro; *et al.* 2005, *op. cit.* p. 75

¹³⁷ “Se decidió que es insuficiente un brazo orgánico; ahora nos faltaba un brazo político”. Entrevista realizada por el autor a la Sra. Leónida Zurita, Senadora suplente del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Secretaria de Relaciones Internacionales y Directora Nacional del MAS-IPSP.

¹³⁸ La tesis del Instrumento Político surge en 1992, como corolario de la “Marcha por los 500 años de resistencia”. La construcción del Instrumento se extiende hasta 1997, en un proceso de negociaciones entre organizaciones sindicales diversas que, en un principio incluyeron alianzas electorales con partidos de izquierda. Finalmente, en 1997 surge el “Instrumento Político Para la Soberanía de los Pueblos” (IPSP), el cual es el núcleo del Movimiento Al Socialismo, actual partido en el gobierno.

¹³⁹ Stefanoni, Pablo. 2006, *op. cit.* p. 19

En 1994, fue sancionada la Ley de Participación Popular (1994), la cual definió la descentralización político-administrativa del país, a través de su “municipalización”. Los efectos de la ley fueron más bien dispares, aunque se acuerda que, su efecto principal fue extender las luchas por el poder nacional a los niveles locales, permitiéndole a los partidos políticos y al Estado conseguir votos y ejercer cierto control sobre las comunidades autónomas. Ahora bien, en el caso del movimiento cocalero, aquella cohesión y fortaleza de su estructura sindical que permitió una efectiva movilización social, también garantizó al movimiento la posibilidad de monopolizar los beneficios de la reforma. “Desde las protestas a las propuestas”¹⁴⁰, el IPSP inició un camino de grandes logros electorales que, entre 1997 y 2005 lo llevó, bajo la sigla prestada de Movimiento Al Socialismo (MAS), desde el gobierno municipal hasta la presidencia misma¹⁴¹. Podemos decir que el IPSP-MAS, “se trata, en todo caso, de una forma inédita en América Latina de articulación entre lo político y lo social que demostrará una elevada productividad política.”¹⁴²

En forma conjunta a la participación electoral, el movimiento cocalero continuó movilizándose activamente, siendo a partir del año 2000, uno de los mayores protagonistas del ciclo de protesta bolivianos. Un interesante discurso con fragmentos nacionalistas, indigenistas y antiimperialistas, así como también su capacidad de articulación con otros actores, dieron al movimiento una gran visibilidad y le concedieron una base amplia de apoyos sociales, desde la cual el MAS-IPSP llegó en 2005 a la presidencia. Sin embargo, aún hasta hoy, el MAS-IPSP, continúa debiendo su fortaleza y cohesión a la estructura sindical cocalera.

En este, nuestro último capítulo, hemos visto en qué forma el neoliberalismo, enmarcado en los procesos históricos descritos en secciones anteriores, al mismo tiempo que homogenizó la estructura nacional de poder político y económico, impulsó un proceso de

¹⁴⁰ Entrevista realizada por el autor a la Sra. Leónida Zurita, Senadora suplente del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Secretaria de Relaciones Internacionales y Directora Nacional del MAS-IPSP.

¹⁴¹ En 1995 el MAS-IPSP logra ocupar los tres municipios del Chapare. En las elecciones generales de 1997, ocupa cuatro diputaciones nacionales. En 1999, el movimiento logra 11 alcaldes y 81 concejales. En 2002, es la segunda fuerza política del país, y consigue 27 diputados y 8 senadores. En el año 2003, el movimiento cuenta con 150 alcaldes (de un total de 314) y 482 concejales. En 2005, Evo Morales llega a la presidencia con el 54% de los votos. Entrevista realizada por el autor a la Sra. Leónida Zurita, Senadora suplente del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Secretaria de Relaciones Internacionales y Directora Nacional del MAS-IPSP.

¹⁴² *Ibid.*, p. 64

profundo reacomodamiento de la estructura social boliviana. Así, como hemos visto, la desarticulación del tejido industrial “nacional” y la crisis económica del altiplano impulsaron un proceso de *migraciones masivas* que, en condiciones de desarrollo económico limitado y un contexto de marginalidad y precariedad económico-social, concluyeron en la expansión de la *lógica agraria tradicional*, base para la articulación y emergencia de los nuevos actores sociales bolivianos, tanto urbanos como rurales; fundamentalmente El Alto y el Chapare.

Conclusión

Desde su creación en 1952, la Central Obrera Boliviana, constituida en su núcleo duro por el movimiento minero, se constituyó en *vanguardia* militante y en eje articulador del movimiento popular boliviano, durante décadas, motor de sus luchas políticas y sociales. Su identidad y discurso *clasistas* representaron todo un ciclo histórico en Bolivia, aquel delimitado en el proyecto nacionalista revolucionario inaugurado con la Revolución del '52, el cual impulsó la soberanía nacional desde la modernización capitalista dirigida por el Estado. De protagonista privilegiado a principal enemigo del Estado, su historia fue de lucha y resistencia, como guardián de un proyecto revolucionario que, como hemos visto, finalmente no fue.

En 1985, el Decreto 21060, apoyado por la fuerza del Estado de Sitio, definió un final abrupto para el ciclo de la economía estatal minera. Con la pérdida de su fundamento estructural, alojado en las minas y mineros del Estado, la COB sufrió su derrota política definitiva. Finalmente, el mayor actor político y social de Bolivia desde 1952 había sido desintegrado en un abrir y cerrar de ojos. Frente a este hecho, la izquierda boliviana, históricamente ligada al movimiento obrero, llegó a diagnósticos tan funestos como el siguiente: “La modificación del fundamento estructural del movimiento popular resumida en la *desproletarización*, se expresa en el plano ideológico como una despolitización de la sociedad civil y una pérdida de la centralidad minera, cuyos rasgos ya se presentan en la realidad... El peligro actual es que siguiendo la tendencia de ‘informalización’ de la economía, se llegue a una situación de *lumpenización* cuyos efectos sean disolventes para la sociedad”¹⁴³ [Las itálicas son del autor].

Los temores de la izquierda parecieron verse confirmados durante la década del '90, en tanto el proyecto neoliberal avanzó irrefrenablemente, sin encontrar respuesta social alguna. Sin embargo, en el año 2000, quince años después del comienzo del ciclo neoliberal, Bolivia asistió a la reemergencia del actor popular, articulado ya no en torno al movimiento sindical de trabajadores organizados, sino como *colectivo fragmentado*, conjunto de actores dispersos y heterogéneos, organizados en microestructuras locales de acción colectiva, con fuerte capacidad de control social y territorial, y bajo una identidad de autonomía y resistencia frente al Estado. Esta nueva multitud organizada, ha venido a constituirse en una *síntesis* de la

¹⁴³ Toranzo Roca, Carlos F.; Arrieta Abdalla, Mario. 1989, *op. cit.* p.132-134

formación social compleja boliviana, instancia de convergencia de profundos procesos históricos de cambio económico y social, a través de los cuales las formas comunitarias y horizontales de integración social fueron constituyéndose en realidad e identidad articuladora del conjunto fragmentario de los sublevados. “Hay, evidentemente, una forma de organización que viene desde la comunidad indígena y sin la cual es imposible entender el fenómeno social boliviano contemporáneo.”¹⁴⁴

En relación a lo antedicho, el argumento de nuestra investigación ha intentado dar cuenta de aquellos procesos de continuidad y cambio estructural que facilitaron y determinaron el influjo histórico de la *comunidad*: su supervivencia, expansión y actualización, concretada en la articulación de los nuevos actores sociales bolivianos. En tal sentido, la preferencia por un argumento del tipo histórico-estructural nos ha permitido explicar aquel recorrido causal temporalmente amplio que media entre la conformación de un espacio local autónomo bajo la Revolución del '52, hasta su reactualización en nuevos espacios territoriales, rurales y urbanos; desde la comunidad y el sindicato agrario tradicional, hasta el movimiento cocalero del Chapare y las juntas vecinales de la ciudad de El Alto.

Nuestro argumento ha sido estructurado en tres períodos históricos relevantes: la Revolución del '52, la restauración conservadora y el neoliberalismo. Como punto de partida de nuestra investigación, la revolución del '52 ha sido abordada desde sus efectos profundos en la configuración del espacio rural. Hemos visto en qué forma, la centralidad del actor obrero en los primeros meses de la revolución determinó el desborde de la insurrección hacia el sistema local y la activación del movimiento campesino, facilitando el proceso de sindicalización agraria. La conformación y extensión de los sindicatos agrarios fue la base sobre la cual se consolidó aquel espacio de autoorganización social autónoma, presente ya en la comunidad indígena. Como se dijo anteriormente, en la extensión del sindicato como estructura de autogobierno rural, el sistema local en su realidad más cotidiana escapó casi por completo al control estatal central, habilitando la supervivencia de estructuras y prácticas colectivo-solidarias de integración social autónoma.

Como hemos visto en el segundo capítulo, los procesos políticos y económicos abarcados por el período de la restauración conservadora definieron la continuidad y supervivencia de la estructura agraria tradicional, a través de la subordinación política del

¹⁴⁴ Entrevista realizada por el autor al Sr. Antonio Peredo, Senador titular del Movimiento al Socialismo (MAS)

movimiento campesino sin control local efectivo, y la marginación del espacio rural altiplánico respecto del proceso de modernización económica limitada, bajo el nuevo modelo de desarrollo definido a partir de 1956. También hemos visto en qué forma, la misma ausencia de modernización derivó en el empobrecimiento progresivo de la población campesina, la extensión del minifundio improductivo y la migración de sus excedentes poblacionales, en un contexto de ausencia de alternativas económicas viables que, finalmente, prefiguró las condiciones para una progresiva expansión y dispersión geográfica-demográfica de las sociedades tradicionales, y la readaptación de sus estructuras y prácticas comunitario-solidarias.

Como último período histórico, el ciclo neoliberal consolidó y profundizó aquel proceso de diferenciación estructural hacia el interior de la unidad estatal iniciado en 1956, con importantes consecuencias económicas y sociales. En el sistema nacional, la política de reestructuración económica y la desarticulación de la economía estatal minera se tradujeron en la desaparición del actor obrero y la homogeneización del poder económico y político. En tanto, en el sistema local, la política de apertura económica profundizó la crisis de la agricultura tradicional y los procesos de pauperización rural ya presentes en el período anterior. En forma combinada, los cambios producidos en el sistema nacional y local definieron un profundo proceso de reconfiguración de la estructura social boliviana, proceso que se halla en el origen de la articulación de los nuevos actores. Como hemos visto anteriormente, la desarticulación del tejido industrial “nacional” y la crisis económica del altiplano impulsaron un proceso de *migraciones masivas* que, en condiciones de desarrollo económico limitado y en un contexto de marginalidad y precariedad económico-social, definieron la expansión de la *lógica agraria tradicional*, aquí conceptualizada como economía de subsistencia, estructurada en torno a unidades familiares, las cuales gestionan el espacio territorial en forma colectiva y horizontal, bajo estructuras y prácticas originadas en la comunidad agraria tradicional, reactualizadas y adaptadas a los nuevos espacios, urbanos y rurales.

Este proceso de expansión geográfica y demográfica de las estructuras agrarias tradicionales ha sido el eje explicativo para comprender de qué forma la profunda dislocación económica y social generada por el neoliberalismo no derivó en aquellos procesos de disolución y lumpenización social presagiados desde la izquierda, sino que, por el contrario, posibilitó el surgimiento de nuevos espacios autónomos de integración, los cuales facilitaron la articulación y el surgimiento de importantes actores sociales.

Como hemos visto, El Alto y el Chapare fueron los espacios donde las contradicciones del desarrollo boliviano limitado y sus consecuencias profundas se condensaron con una intensidad particular. Destinos preponderantes de los campesinos expulsados de sus comunidades de origen, así como también de aquellos mineros y fabriles relocalizados, ambos espacios reflejaron en forma particular la capacidad de actualización e integración social de las estructuras y prácticas comunitarias traídas en la fresca memoria de la migración forzada. En tal sentido, tanto la junta vecinal como el sindicato cocalero, han sido, y continúan siendo, los representantes de una ruralidad que demostró una fuerza de renovación histórica realmente admirable.

Como espacios de organización autónoma y horizontal, El Alto y el Chapare resultaron ser territorios donde la capacidad de movilización propia de las estructuras comunitarias de origen se ha visto fuertemente expandida, en el primero de los casos por el aglutinamiento y cercanía de las estructuras barriales; en el segundo, por la integración de bases concretada frente a la amenaza estatal. De esta forma, tanto el movimiento cocalero como los vecinos alteños se convirtieron en los principales referentes de la acción colectiva en Bolivia.

Para concluir, queremos recordar al lector que nuestro argumento histórico-estructural no ha pretendido explicitar el conjunto de las causas determinantes de la movilización social, sino que, simplemente, se ha limitado a iluminar sus *causas históricas*, relacionadas a los procesos que se encuentran en el origen de los actores sociales movilizados a lo largo del ciclo de protesta boliviano. Queda fuera de nuestra investigación toda referencia a las causas inmediatas de la movilización, aquellas que, a partir del año 2000, pusieron en movimiento al conjunto de los actores sociales involucrados: comunidad, sindicato y junta vecinal.

Bibliografía

- Albó, Xavier. *¿Bodas de Plata? o Requiem por una Reforma Agraria*. La Paz: Centro de Investigación y promoción del campesinado (CIPCA), 1979.
- Calderón, Fernando; Dandler, Jorge (Comp.). *Bolivia: La fuerza histórica del campesinado*. Ginebra: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986.
- Calderón Fernando; Szmukler, Alicia. *La política en las calles*. La Paz: Plural, 2000.
- Ceceña, Ana Esther. *La Guerra por el Agua y por la Vida*.” Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo, 2005.
- Celedón, Carmen, et. al. *La política económica en la transición a la democracia*. Santiago: Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), 1993.
- Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). *El futuro de la comunidad campesina*. La Paz: CIPCA, 1992.
- Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano (CIEDLA). *Los Partidos Políticos en América Latina*. Buenos Aires: CIEDLA, 1991.
- Cusicanqui, Silvia. *Opressed but not defeated*. Ginebra: Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986; p.66
- Daroca, Santiago. “La Guerra del Agua. Protesta y acción social en Cochabamba.” *Cuadernos de trabajo*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2001
- De la Garza Toledo, Enrique. *Sindicatos y nuevos movimientos sociales*. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
- Domingo, Pilar. *Democracy and New Social Forces in Bolivia*. Social Forces - Volumen 83, Número 4, Junio 2005.
- Dunkerley, James. *Rebelión en las venas*. La Paz: Plural, 2003.
- Eróstegui, Rodolfo. *El movimiento sindical hacia el año 2000*. La Paz: ILDIS, 1990.
- Escobar de Pabón, Silvia. “Ajuste y liberalización, las causas del conflicto social.” En: Coyuntura (OSAL). La Paz, Octubre 2003.
- Fernández Terán, Roberto. *FMI, Banco Mundial y Estado neocolonial. Poder supranacional en Bolivia*. La Paz: Plural Editores, 2004.
- Gamarra, Eduardo A., et al. *Democracy, Markets, and Structural Reform in Latin America*. . Miami: North-South Center, University of Miami, 1993.
- García Linera, Álvaro. *Rebelión en las venas*. La Paz: Comuna, 2001
- García Linera, et. al. *No somos juguete de nadie...* . La Paz: Plural, 2006.

- Huizer, Gerrit. *El potencial revolucionario del campesinado en América Latina*. Mexico, Siglo XXI, 1977
- Kruse, Thomas. “Transición política y recomposición sindical. Reflexiones desde Bolivia”. *Los sindicatos frente a los procesos de transición política*. La Paz: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2001.
- Labrousee, Alain. “La importancia de la coca y el narcotráfico en la economía boliviana.” En: *Revista Internacional del Trabajo*. 1990, Vol 109, N° 2
- Lair, Eric (Ed.). *Violencias y estrategias colectivas en la región andina*. Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2004
- Loayza Caero, Román. “*Movimiento Campesino, 1996-1998*.” La Paz: Fondo Editorial de los Diputados, 2000.
- Malloy, James. *Bolivia: The uncompleted Revolution*. University of Pittsburgh Press, 1970
- Mamani Ramírez, Pablo. *El Rugir de las Multitudes*. La Paz: Ediciones Yachaywasi, 2004.
- Mamani Ramírez, Pablo. *Microgobiernos Barriales*. El Alto: Centro Andino de Estudios Estratégicos (CADE), 2005.
- Mayorga, Antonio René (Coord.). *Democracia y Gobernabilidad*. Caracas: Nueva Sociedad, 1992.
- McAdam, Doug, ed. *Movimientos sociales. Perspectivas comparadas: oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Madrid: Istmo, 1999.
- Mesa, Carlos. “Bolivia. Frente a un nuevo Estado.” En: Nueva Sociedad, Mayo-Junio 1997.
- Orellana Aillón, Lorgio. *Nacionalismo, populismo y régimen de acumulación en Bolivia. Hacia una caracterización del gobierno de Evo Morales*. La Paz: CEDLA, 2006.
- Patzi Paco, Felix. *Insurgencia y Sumisión. Movimientos indigeno-campesinos (1983-1998)*. La Paz: Comuna, 1998
- Prada Alcoreza, Raúl. *Largo Octubre*. La Paz: Plural, 2004.
- Prudencio Campero, Fernando (Comp.). *Bolivia en el Siglo XX. La formación de la Bolivia Contemporánea*. La Paz: Harvard Club de Bolivia, 1999.
- Rauber, Isabel. *Movimientos sociales y representación política*.” La Paz: Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, 2003.
- Robins, Nicholas A. *Conflictos políticos y movimientos sociales en Bolivia*. La Paz: Plural, 2006.
- Stefanoni, Pablo; Do Alto, Hervé. *Evo Morales de la coca al Palacio*. La Paz: Malatesta, 2006.

Tarrow, Sidney. *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, ES Alianza 1997.

Toranzo Roca, Carlos F.; Arrieta Abdalla, Mario. *Nueva derecha y desproletarización en Bolivia*. La Paz: ILDIS, 1989.

Toranzo Roca, Carlos. *Rostros de la Democracia: una mirada mestiza*. La Paz: Plural, 2006.

Torre, Juan Carlos. *Las dimensiones políticas e institucionales de las reformas estructurales en América Latina*. Santiago de Chile : Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1997.

UNITAS. *Políticas Agrarias y Seguridad Alimentaria en Bolivia (1970-1990)*. La Paz: Huellas, 1991.

Vacaflares, Victor. "Migración interna e intraregional en Bolivia. Una de las caras del neoliberalismo." En: *Revista de Aportes Andinos*. Quito, Octubre 2003, N° 7.

Yashar, Deborah. "Contesting Citizenship. Indigenous movements and Democracy in Latin America." En: *Comparative Politics*, Vol. 31, No. 1, October 1998.

Yashar, Deborah. "Democracy, Indigenous Movements, and the Postliberal Challenge in Latin America." En: *World Politics*, Vol. 52, No. 1, October 1999.

Entrevistas

Entrevista realizada por el autor a la Sra. Leónida Zurita, Senadora suplente del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Secretaria de Relaciones Internacionales y Directora Nacional del MAS-IPSP. Febrero 2007, La Paz, Bolivia.

Entrevista realizada por el autor al Sr. Antonio Peredo, Senador titular del Movimiento al Socialismo - Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Febrero 2007, La Paz, Bolivia.

Entrevista del autor con la Sra. Magdalena Cajías de la Vega, Historiadora, Investigadora y Profesora en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en La Paz. Febrero 2007, La Paz, Bolivia.

Entrevista del autor con el Sr. José Antonio Quiroga, analista independiente y director de la Editorial Plural. Febrero 2007, La Paz, Bolivia.

Entrevista del autor con la Sra. Loreta Tellería, Politóloga y Directora del "Observatorio de Democracia y Seguridad (OdyS)." Febrero 2007, La Paz, Bolivia.

